

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA
Tesis Licenciatura en Ciencia Política

**El malestar con la política: movimiento estudiantil
chileno y tecnocracia**

Daniel Fernando Otero Carballo
Tutor: Daniel Chasquetti

2014

RESUMEN: En la última década, se constata en Chile un movimiento social, con epicentro en las movilizaciones de los estudiantes, que deja al descubierto un déficit importante en el sistema político, junto a un creciente malestar con la política. La forma de transición a la democracia, la institucionalidad heredada, sus consecuencias y los *nuevos-viejos* actores, parecen estar en la génesis de este creciente malestar ciudadano.

Esta institucionalidad restringida, heredada de la dictadura, favoreció una forma de *hacer política*, con base en una *legitimación funcional o tecnocracia*, que establece de manera implícita, la idea de que la *política* y por lo tanto los *políticos* ya no son instrumentos suficientemente eficiente y validos, y que encuentra en las movilizaciones de jóvenes, -en su mayoría nacidos y educados en los años de la transición democrática- el reflejo de este creciente malestar, que tiene a la educación como eje de las movilizaciones, pero considerando, que lo educacional, no es causa primera ni fundamental de estas movilizaciones.

El trabajo busca relacionar la institucionalidad política, con el recurso *tecnocrático* para gobernar y la respuesta de una parte de la sociedad, que tiene en las movilizaciones por reformas en la educación una fundada excusa, pero que en realidad esconde otros motivos más profundos que hacen a la forma de cómo se construyó la transición y las consecuencias que ella deja.

1. INTRODUCCIÓN

Los trabajos recientes de la Corporación Latinobarómetro, muestran la opinión de los chilenos respecto a un conjunto amplio de temas y valores. Allí pueden observarse demandas, imagen de progreso, situación económica, desempleo, educación, satisfacción con la democracia, etc. El siguiente cuadro compara esos resultados con los del promedio de los países de la región.

Chile: Latinobarometro entre 2010 y 2011- El desplome de Chile

	Chile2011	América Latina2011	Diferencia Chile - América Latina	Chile2010	Diferencia Chile 2010-2011
La educación es la mejor política pública del país	1	33	-32	-	
Imagen de progreso en el país	29	35	-6	55	-26
Confianza en la Iglesia	38	64	-26	62	-24
Satisfacción con la democracia	32	39	-7	56	-24
Confianza en el Gobierno	34	40	-6	58	-24
Situación económica personal futura	30	42	-12	48	-18
Expectativa económica personal	30	42	-12	48	-18
Las privatizaciones han sido beneficiosas para el país	20	36	-16	34	-14
La economía de mercado es el único sistema para ser desarrollado	43	56	-13	56	-13
La empresa privada es indispensable para el desarrollo del país	63	65	-2	76	-13
Se gobierna para el bien de todo el pueblo	22	26	-4	34	-12
Situación económica actual del país	16	18	-2	27	-11
Satisfacción con los servicios públicos privatizados	18	31	-13	27	-9
Satisfacción con la vida	62	72	-10	71	-9
Desempleo como problema más importante	10	16	-6	17	-7
¿Cuán justa es la distribución de la riqueza?	6	20	-14	12	-6
Delincuencia como el problema más importante	21	28	-7	22	-1
Confianza Interpersonal	17	22	-5	17	0
Victima de delito	29	33	-4	25	4

Fuente www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20111028/.../chilealdesnudo.pd

Estos números, contradicen la imagen de Chile como un país exitoso en lo económico y educacional. Éxito que tampoco se corresponde con la distribución de la riqueza ni con la equidad generada.

Las movilizaciones estudiantiles de los últimos años, que incluye a una parte importante de las sociedad, -clase media emergente, que no logra encontrar su lugar en una sociedad fuertemente desigual, y con poca movilidad social- ha sorprendido a los sociólogos y politólogos que estudian el caso chileno, ya sea por lo sorprendivos de éstas, como también por su fortaleza y extensión en el tiempo. Estas movilizaciones se desarrollan en un marco de descontento general de la sociedad, con valores, como lo señala el informe de Latinobarómetro, por debajo a los que se verificaban hace algunos años.

Para Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, los valores no sólo son divergentes con los de la región, sino que además expresan una fuerte preocupación de la sociedad chilena por temas como la concentración del dinero y del poder en una minoría, representada por políticos, empresarios, y grupos de toma de decisiones, como lo son gobierno, partidos y Congreso.

Estas movilizaciones, van más allá de lo referido a la educación. Trabajos estadísticos¹ muestran que, aproximadamente 7 de cada 10 estudiantes provienen de hogares donde no existía educación superior; pero también los números muestran que 6 de cada 10 jóvenes que terminan la secundaria, no “*entran a nada*”. Protestas y movilizaciones, que dejan dudas a una parte de la academia, en el manejo de hipótesis y datos, que vinculan el desarrollo económico, con el éxito de los sistemas democráticos y sus diversas formas de representación.

Este trabajo busca encontrar explicaciones a esta ruptura de una parte de la sociedad chilena con el sistema político -del cual reniega y creen poder dejar de lado- en un contexto de éxitos económicos y en un mundo con una fuerte interconexión. Chile, se muestra polarizado socialmente y políticamente y esto se refleja en su sistema político, ya que no encuentra como representar y canalizar estas protestas. Las movilizaciones abren signos de interrogación sobre los vínculos de parte de la sociedad con la política, sus formas de representación y la forma como el sistema responde a las demandas.

En el contexto político chileno asistimos a procesos de cambio y transformaciones en las pautas de acción política y en la forma de concebirlas. Estos cambios son llamados de atención y respuesta, a fallas, distorsiones o cambios en las principales instituciones del quehacer político. Las

¹ Informe regional de población en América Latina y el Caribe 2011. Invertir en juventud. En <http://www.slideshare.net/dikerd/informejuventud2011>

transformaciones que experimenta, tanto la política como sus instrumentos –llámese partidos y agencias políticas- producto de nuevas pautas culturales y desarrollo de las tecnológicas de la información, está produciendo fatigas y antipolítica, que en realidad es otra forma de hacer política. Se cuestiona a los actores tradicionales de la política, a los que se consideran ineficientes, agotados o anticuados, pero también se generan nuevas herramientas, y diferentes actores y organizaciones de acción y participación. (Castells, 2002).

Esta antipolítica, -que en otros países de la región, puede tener su génesis en la descomposición o poca institucionalización de los partidos políticos-, no parece ser la consecuencia en el caso de Chile, donde el sistema de partidos muestra aparentemente fortalezas y desarrollo, en un contexto de éxito económico.

El comportamiento de la sociedad chilena, parece estar lejos de haber ingresado en un proceso de personalización de la política, mesianismo o nuevo populismo (como ocurre en países como Venezuela, Ecuador o Bolivia), ya que cuenta con organizaciones partidarias estables, fuertes y disciplinadas. Frente al avance de la antipolítica -o mejor llamada, nuevas formas de hacer política-, se impone el reforzamiento del sistema político, lo cual implicaría modernización, redimensionamiento y adaptación, con el fin de mejorar la gobernabilidad. (Castells, 2002), (O'Donnell, 2009) (Rivas, 2002).

La transición en Chile heredó/generó un conjunto de instituciones que motivaron/desarrollaron un sistema político incapaz de dar respuestas a sociedades cambiantes. A esto se le suma la escasa competencia entre partidos por la fuerte convergencia programática y el *corset* electoral binominal, que tiene como consecuencia el distanciamiento de los partidos de una parte importante de la sociedad, y que determina una baja en la calidad de la democracia.

El movimiento estudiantil chileno es el punto de partida de este trabajo y se le considera como un indicador de malestar con la política. El movimiento estudiantil chileno, -que tiene su origen a nivel de la enseñanza secundaria, pero que en la actualidad responde más a la enseñanza universitaria-, los partidos políticos muestran una casi nula capacidad para responder al conflicto, ya sea a nivel local o regional. El conflicto educacional, además de introducirse en la agenda pública, muestra a un sistema político incapaz de resolverlo en base a una salida rápida y consensual.

Para los estudiantes las demandas pasan por “*educación gratuita, fin del lucro, democratización, fin del endeudamiento y el autofinanciamiento y acceso equitativo*” (CONFECH, 2011), en claro antagonismo a las políticas educativas con origen en el gobierno inconstitucional del

general Pinochet de la década del setenta, que se mantuvo a lo largo de los gobiernos democráticos con pocas –algunas importantes- y puntuales modificaciones.

Desde 1990 la respuesta a las demandas de cambio pasan por la rotación de ministros de educación, reforma educacional (proyecto GANE), aumento de gastos en educación, aumento de becas, pero sin profundizar cambios sustantivos en la matriz del sistema educacional que determina un manejo de la educación a partir de pautas de mercado y con un fuerte contexto técnico-racional-mercantil, elementos que son eje y centro de las movilizaciones.

Algunos analistas (Segovia, Gamboa;2012) destacan (i) la rigidez del sistema político-electoral que no encuentra herramientas para responder a las demandas; (ii) la incapacidad del gobierno actual, -sin olvidar que estas movilizaciones comienzan en el gobierno de la Concertación a partir del 2006- para lograr soluciones; (iii) la incapacidad de los partidos políticos de ser reflejo de estas movimientos, ya que los estudiantes, muestran, y con orgullo, una organización autónoma e independiente de éstos; (iv) una baja de la popularidad de los gobiernos y los políticos, ya sean estos de oficialistas o de oposición; (v) faltas de liderazgos claros en los partidos, que permitan intercambio y dialogo entre estudiantes y sistema político, que lleva a que las demandas de parte de la sociedad movilizada no tenga representación en el Congreso y ámbitos de decisión; (vi) falta de liderazgos y recambios generacionales en el propio movimiento de estudiantes, que determinan inestabilidad, y un sindicalismo que tampoco muestra posibilidad de cooptar el movimiento estudiantil.

Todos estos factores contribuyen como piezas de un puzzle a la construcción de una explicación más general sobre el problema detallado. Como explicación de las causas de las movilizaciones y del malestar con la política, propongo la siguiente hipótesis:

La incapacidad de entender y canalizar problemas de la sociedad chilena, se debe en gran medida a una forma hegemónica de gobernar y canalizar demandas, basadas en lo técnico y racional, más allá de percibir los problemas y sus posible soluciones desde lo político. A cuestiones propiamente políticas, últimamente se las enfrenta como meros asuntos técnicos, destinados a ser resueltos por expertos, que en la mayoría de los casos están por fuera de lo político. Este fenómeno sería consecuencia de la herencia del régimen de Pinochet, que tiene en algunos puntos de la Constitución de 1980 una causa excluyente, que determina la forma y el tipo de transición, y que a diferencia de otras transiciones, limita y restringe los cambios en el status quo. Por tanto, las

movilizaciones por cambios en la educación van más allá de lo coyuntural y responden al déficit e incapacidad del sistema político chileno para representar y proponer cambios profundos a la situación generada.

Por tanto, el trabajo buscará analizar el divorcio existente entre una parte de la sociedad chilena y su sistema político. En los apartados siguientes, se analizan las dimensiones que hacen a la hipótesis del trabajo: la político-institucional con su componente histórica y la educativa-tecnocrática, vinculada con la económica.

2. EL FORMATO POLITICO-INSTITUCIONAL

2.1. Dimensión histórica

En pocos países de América Latina, los partidos políticos tienen una importancia y centralidad durante un periodo de tiempo tan largo, como se verifica en Chile. Para muchos autores, (Chasquetti, 2008; Lanzaro, 2001; Mainwaring, 1999; Siavelis, 2004; Garretón 2010), los partidos chilenos se parecían, en lo referente a su sofisticación y organización, a partidos europeos antes que a otros de Latinoamérica. En Chile, a diferencia de otros países de la región, desde sus orígenes las fuerzas políticas han estado siempre alineadas en tres grandes sectores, con partidos que se ubican en el espectro ideológico izquierda-derecha, con claro posicionamiento en la izquierda y la derecha, y un centro político que se desplaza según el acontecer político.²

El conflicto religioso, producido en el siglo XIX, generó una primera reorganización de la élite política entre clericales y anticlericales. Desde su independencia en 1810, Chile al igual que otras naciones del continente en la misma época, se caracterizó por su anarquía y desorganización, pero a diferencia de otros, ello ocurrió durante un periodo muy breve. Para algunos historiadores, este periodo es fruto de una oligarquía rural homogénea, intereses económicos regionales, y élites hacendadas conservadoras. Ésta configuración lo conduce rápidamente a un régimen políticamente estable, con expansión del Estado y su autoridad por el territorio nacional, venciendo en los desafíos armados y estableciendo una hegemonía de la autoridad, inclusive por encima del ejército regular.³

En 1850 y producto de enfrentamientos entre clericales y anticlericales, surgen el Partido Conservador (PC), con base en la oligarquía gobernante y una elite política disidente más afines a un estado secular que da origen al Partido Liberal (PL).⁴

² Esta configuración política tiene, para algunos autores, sus orígenes en tres choques políticos-sociales verificados en los orígenes de la institucionalización política chilena. "... la evolución del sistema de partidos chileno en los siglos XIX y XX puede entenderse en parte como el legado de la forma en que tres fisuras sociales básicas -la religiosa, los conflictos de clase urbanos y rurales- se politizaron en tres momentos temporales históricamente discretos." (Scully, 1996; 91)

³ La Constitución de 1830, brinda el marco legal para la estructuración de un sistema de partidos importante a partir de la década de 1850, con un sistema bicameral con presidente y senadores elegidos en lo nacional en forma indirecta y los disputados en forma directa. "Fue en el contexto institucional de la llamada "república parlamentarista" en un ámbito político competitivo, con organizaciones partidistas en expansión, donde las divisiones de clase se hicieron políticamente manifiestas". (Siavelis, 2001:85)

⁴ Esta primera bipolaridad, se rompe cuando una parte de los liberales, ante la posibilidad de obtener el gobierno se unen con el PC, dando origen a un nuevo sector formado por los liberales de línea dura y que da origen al grupo de los radicales, y a la formación de un sistema multipartidario, y a la necesidad de formación de coaliciones y alianzas, que dan origen a importantes modificaciones electorales, y que tiene como consecuencia, "que los partidos adquieran una base de electores disciplinada que votará según instrucciones partidarias". (Siavelis, 2001:220). El choque político-social que se produce en los primeros años del siglo XX, da origen a un nuevo clivaje institucional que tiene como base

Entre 1903 y 1905 nace el Partido Demócrata (PD), con la intención de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Su labor se distinguió por la creación de sociedades de ayuda mutua, el apoyo a las huelgas, y el desarrollo de una estrategia electoral, con el fin último de lograr el gobierno. Sin embargo, su éxito fue relativo al no responder a las expectativas de la clase trabajadora. Frente al fracaso de los líderes tradicionales y sus partidos, y como forma de mitigar el importante descontento social con origen en las condiciones de trabajo y explotación, surgen los partidos de la clase trabajadora, el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC), que se ubican en el extremo izquierdo del eje ideológico, desplazando a los Radicales al centro, y dejando a los Conservadores y Liberales en el extremo derecho.⁵

La frustración con el gobierno del Frente Popular de la década del treinta (integrado entre otros por los partidos de izquierda), conduce a la fragmentación del Partido Socialista, y a una postura más radicalizada del Partido Comunista, lo cual supuso su alejamiento de entendimientos y coaliciones con otros partidos. Los acuerdos del Partido Radical con la derecha, permitió a los partidos obreros aumentar su influencia en el sector rural, lo que se traduce en un aumento de sus electores en las elecciones de 1947, poniendo en alerta a los partidos de la derecha, que creían tener el sector rural un apoyo seguro.

En la década del cincuenta, los partidos políticos incorporan a la población rural a la estructura política- electoral chilena. La política de industrialización que llevó adelante el Frente Popular, se basaba en acuerdos de las *“elites industriales y agrícolas y el liderazgo de la clase trabajadora, para excluir al campesinado”* (Scully, 1996; 87).

A partir de las elecciones de 1953, y hasta 1973 los partidos de izquierda presentan candidatos propios a las elecciones, generando modificaciones en el sistema de partidos, que se

el conflicto de clase del sector urbano, a partir del creciente número de trabajadores, producto del desarrollo industrial y comercial que se produce en Chile a partir de 1890, que además de generar líneas de conflictos entre sindicatos y elites económicas, introduce en la sociedad chilena nuevos elementos sociales y políticos.

⁵ En la elección de 1932, que trajo nuevamente la competencia de partidos al sistema chileno, -luego de un periodo de inestabilidad económica y política, producto de golpes militares- el candidato Arturo Alessandri, que en las elecciones de 1920, ocupó la “izquierda” en las del 32 representa la centro derecha, en el nuevo espectro político, como consecuencia de nuevos actores en el sistema de partidos. *“Más que cualquier otro rasgo del sistema de partidos posterior a 1932, fue la incorporación de las clases trabajadoras urbanas a partidos viables lo que hizo posible el restablecimiento de un régimen competitivo político estable.”* (Scully, 1996; 87). Estas elecciones, afirmaron a los partidos de clase trabajadora, con casi un tercio del electorado, si sumamos los votos de otros partidos independientes y marginales, en una estrategia de buscar alianzas electorales con otros partidos, y que finalmente lleva al triunfo electoral del Frente Popular en 1938, con Aguirre Cerda como candidato, en un entorno de estabilidad política, con el PR, como eje articulador de alianzas y acuerdos electorales. *“Los radicales llegaron a ser los principales intermediarios dentro del sistema de partidos, tal como lo habían sido los liberales”.* (Scully, 1996; 87) En las décadas del 30 y 40, los partidos de derecha tienen un importante apoyo, muy cerca del 40 por ciento, resistiendo a la fragmentación del sistema de partidos.

confirmarán en las elecciones de 1953 con el triunfo de Ibáñez, candidato populista que desplaza a los partidos de derecha a su más bajo apoyo electoral y que tiene entre otras consecuencias la formación de nuevos actores partidarios, entre ellos, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) a partir de 1957.

La entrada en el escenario político del PDC, de claro perfil obrero y popular, genera en el sistema de partidos chileno, la división del eje ideológico en cuatro espacios no muy claramente delimitados: el FRAP en la izquierda, conservadores y liberales en la derecha, y el PDC en el centro junto al Partido Radical, este último volcado un poco más a la derecha. A fines de los 50, comienza a disminuir el apoyo electoral a los partidos de derecha, teniendo como contraparte un aumento significativo de los votos de izquierda y centro, que alcanzan entre ambos su valor máximo de 42,3 por ciento, que no se volverá a repetir para un partido en forma individual en la política chilena.⁶

Como consecuencia de lo anterior, el sistema político chileno queda, a principio de la década del 70, dividido en tres bloques electorales claramente definidos que dividían al electorado en tercios. Esto queda en evidencia, en las elecciones de 1970, cuando en primera vuelta gana la Unidad Popular, con Salvador Allende como candidato presidencial, por muy poca diferencia, y el parlamento, confirma en segunda instancia la presidencia a favor de la izquierda, pero con una sociedad polarizada ideológicamente, con extremos fuertes, competitivos y organizados. *“La movilización política y social, que escapo por mucho el control de las elites partidarias que habían querido fomentarla, alcanzó niveles delirantes durante el gobierno de la Unidad Popular”* (Scully, 1996:89).

Esta síntesis sobre los orígenes y el desarrollo del sistema de partidos chileno, resulta necesaria para conocer la raíz histórica de la fuerte institucionalización de los partidos políticos chilenos. La configuración histórica de los partidos políticos chilenos muestra un sistema multipartidista, acompañado de importantes niveles de polarización. Son partidos con objetivos programáticos claros y estructura interna fuerte y organizada, que a lo largo de la historia acompañaron y representaron los intereses de la sociedad. A su vez, la sociedad vio en ellos a sus,

⁶ Esta estructura del sistema de partidos, será a partir de la década del sesenta determinante de las coaliciones y acuerdos, que están en la mayoría de los casos en función del comportamiento y expectativa de los rivales, que se confirma, cuando para las elecciones de 1964 y como forma de evitar el triunfo de Salvador Allende, el PDC logra el apoyo de la derecha, con su candidato Eduardo Frei, obteniendo el 55,6 por ciento de los votos, que los lleva a pensar que pueden gobernar solos, no aumentando su base política, y formando alianzas circunstanciales, y tratando de hegemonizar el sistema de partidos, desde su centralidad ideológica, en un comportamiento de partido *“catchall”* y que tiene como consecuencia la polarización del sistema de partido; cuando este intento de poder hegemónico, invade sectores que se sienten amenazados, -reforma agraria, sindicalización campesina, modificación del derecho de propiedad- generara una fuerte radicalización, que en el futuro limitará las posibles alianzas de centro derecha. Esta búsqueda del voto extremo, amenaza a los partidos de izquierda y derecha su base electoral histórica y fundamental para estos partidos en la formación de acuerdos y coaliciones.

claros representantes y los concibió como instrumentos fundamentales para la construcción, fortalecimiento y mantenimiento del sistema democrático.

2.2. Una institucionalidad heredada y una realidad determinante

Es necesario tener en cuentas las características actuales del sistema político chileno, como elemento que en gran medida determina/justifica las movilizaciones estudiantiles y el malestar con la política.

En la actualidad, la sociedad chilena, se encuentra polarizada ideológicamente, por lo que el ejercicio de gobierno implica desafíos y reajustes continuos. Una de las tareas principales de la política democrática se vincula con la posibilidad de distender el antagonismo potencial que existe en las sociedades, mediante la construcción de vínculos comunes entre las partes en conflicto, de forma tal que los oponentes no se traten como enemigos que deben ser eliminados o tomen sus demandas como ilegítimas. La política democrática busca en este relacionamiento los consensos, que permitan la acción, el acuerdo y el desarrollo de lo público más allá del poder.

La movilización de una parte de la sociedad, por el motivo que sea, requiere de la *politización* que surge del conflicto de intereses, los cuales pueden ser legítimos o no, pero que en todos los casos, supone una representación conflictiva del mundo, generando observaciones opuestas, con las cuales la gente se puede identificar y movilizar. El sentido de la política es la libertad, que está ausente en las experiencias totalitarias, donde sí la vida entera está politizada en una única dirección y la política es una necesidad ineludible de los humanos como medio para obtener fines más elevados.

Es necesario tener en cuentas las características actuales del sistema político chileno, como elemento que en gran medida determina-justifica las movilizaciones. El sistema fuertemente presidencial de Chile y las características de los partidos políticos, resulta un factor fundamental que en parte explica la falta de respuestas a las demandas de una parte de la sociedad.

Un presidencialismo fuerte.

En el presidencialismo chileno, el presidente ejerce un fuerte liderazgo, personalizado y generalmente distante de los partidos políticos y el Congreso. Si bien las reformas introducidas en la Constitución por el gobierno democrático, limitaron algunas de las competencias otorgadas al presidente por el régimen militar, la presidencia chilena es una de la más fuerte de la región con

amplias e importantes potestades que permiten, entre otras cosas, un importante control sobre el funcionamiento del poder legislativo.

Entre las prerrogativas constitucionales del presidente chileno pueden mencionarse los poderes de veto, su competencia para actuar por decreto, las áreas de iniciativa exclusiva en materia de legislación, y la capacidad para influir y controlar la agenda legislativa a través de las declaratorias de urgencia, que obliga al parlamento a tratar la propuesta del ejecutivo en plazos perentorios, dejando los demás proyectos en suspenso. Este último procedimiento, previsto para circunstancias extraordinarias se ha convertido en un instrumento común en los gobiernos chilenos pos-dictadura.

Estas prerrogativas, junto a otras normas constitucionales, imponen limitaciones reales a los congresales, disminuyendo la importancia y legitimidad de su función y la del Poder Legislativo. Los representantes del voto popular, no encuentran en el sistema presidencial chileno, formas de llevar adelante iniciativas provenientes de la sociedad, si no cuentan con el apoyo del Poder Ejecutivo. A los poderes presidenciales antes mencionados y con rango constitucional, debemos sumar otros que no lo son, pero que da al ejecutivo mayores capacidades de acción e influencia, como lo puede ser el manejo de la información, en cantidad y calidad no por limitaciones para otros y si por poder de organización, que permite generar legislación en cantidad y calidad.

Además, el presidente chileno, tiene poder exclusivo en algunos asuntos críticos, especialmente presupuestos, política militar, creación de nuevas particiones burocráticas y leyes sobre políticas tarifarias y crediticias, otorgando ventajas al presidente –poder de veto, introducción exclusiva de iniciativa- en las situaciones en que el Congreso quiera iniciar o instrumentar cambios. La mayoría de las iniciativas, tienen su origen en el poder ejecutivo, que sumado a la *visibilidad* del presidente y colaboradores, permiten un mejor posicionamiento del Poder Ejecutivo y de la figura del presidente, frente al Poder Legislativo, generando para éste último, bajos índices de popularidad, poco conocimiento de la población de la función de los legisladores y rechazo a su trabajo. (Siavelis, 2004), (Garretón, Garretón, 2010).

Si el ejecutivo además cuenta y controla una coalición mayoritaria en por lo menos una de las cámaras, el ejecutivo tiene suficiente capacidad de marcar la agenda. Mediante el instrumento constitucional del veto, el presidente puede rechazar en forma parcial o total, iniciativas que no cuenten con el apoyo del Poder Ejecutivo. Este veto presidencial, puede ser anulado por el voto de 2/3 de los legisladores; sin embargo, en los cinco gobiernos posteriores a Pinochet esta posibilidad constitucional no fue alcanzada por el Poder Legislativo. La Constitución chilena no prevé

mecanismos de democracia directa. En estos últimos tiempos se recurrió a plebiscitos como formas de conocer la opinión de la ciudadanía, pero estos no son vinculantes, y en lo referido a propuestas de cambios políticos no se han tenido en cuenta los resultados.

Un sistema de partidos institucionalizado

En un sistema institucionalizado, los partidos son actores relevantes, que permiten canalizar las demandas de la sociedad, facilitando el conocimiento de los intereses del electorado, y comprometiéndolos a sus representantes, en la instrumentación de estas demandas. En sociedades democráticas, y con pleno funcionamiento de sus instituciones, los partidos son herramientas a través de las cuales los ciudadanos se expresan, debaten, y elaboran el camino por donde se realiza la inclusión de importantes sectores de la sociedad. Su debilitamiento provoca una pérdida de calidad democrática, por lo que es necesario adaptarse a los cambios, generando nuevas herramientas y estrategias. El fortalecimiento de los partidos es clave para el funcionamiento de una democracia, ya que son dominantes e instrumentos válidos en la construcción de una democracia fuerte, generando controles y equilibrios institucionales. Partidos políticos institucionalizados ayudan a controlar y contener el conflicto, canalizándolo hacia lo electoral y representativo; es decir, interlocutores validados de la sociedad, que a la vez deben contar con la confianza y seguridad de esta sociedad.

La literatura especializada sostiene que la democracia chilena cuenta con partidos políticos fuertemente institucionalizados que a lo largo de la historia han sido representantes de una sociedad política y socialmente diversa. La fortaleza de los partidos políticos, y de los chilenos en particular, se traduce en una mejor calidad en la toma de decisiones y representatividad de la sociedad en la cual están inmersos y a quien busca representar, proporcionando un espacio institucional público para expresar reivindicaciones y demandas.

La democracia chilena, no sólo incluye elecciones periódicas limpias; es el sistema por el cual la sociedad construye un sistema de relaciones de no-dominio entre los ciudadanos, y donde se consolida la ciudadanía en sus tres dimensiones: civil, social y política. En esta construcción democrática, uno de los instrumentos con los que contó históricamente la sociedad para promover el ejercicio democrático permanente, -que fueron ejemplos para la región- son los partidos políticos, que sumado a un Estado fuerte y con bases constitucionales, fueron garantía de los derechos ciudadanos.

En los procesos de adaptación de los partidos chilenos a los cambios, juegan papel fundamental el formato de las transiciones y las herencias del pasado que arrastran estas transiciones. En la construcción de estas transiciones pesan en forma considerable las crisis y

polarizaciones que llevan a las rupturas de sistemas democráticos y sus consecuencias: muertes, persecuciones, restricciones, exilios. Esta transición, determinó fuertes institucionalizaciones y reubicaciones de partidos perseguidos, que se integraron a la democracia representativa y a la competencia electoral⁷.

Autores como Mainwaring y Scully (1997) definen la institucionalización de los partidos, a partir de cuatro características: a) debe existir estabilidad de la competencia, sin cambios espectaculares ni profundos, b) los partidos deben tener raíces y vínculos en la sociedad, que puede ser en lo educacional, geográfico, étnico, etc., c) los partidos deben contar el reconocimiento y legitimidad otorgadas por los restantes actores de la sociedad, d) los partidos deben contar con determinado nivel de organización.

Los partidos políticos chilenos contarían con raíces estables en la sociedad que impiden que se produzcan cambios notables y bruscos en la distribución del mapa electoral entre elecciones. Son organizaciones partidarias que se muestran sólidas y fuertes, con elites leales a los partidos, con disciplina en el Poder Legislativo sólida y centralizados en lo local y nacional y capaces de resistir la competencia electoral durante varios periodos. No obstante, algunos estudios muestran que un porcentaje importante de la población no cuenta con afinidad partidaria (60%), dato que resulta sorprendente si se consideran los patrones de votación histórica y que podría explicarse por la existencia de fuertes coaliciones supra partidarias de centro-izquierda y centro-derecha, que determinan la pérdida de adhesión ciudadana a los partidos como estructuras individuales.

En lo referente a el grado de legitimidad que los chilenos confieren a los procesos electorales y los partidos, la sociedad chilena muestra un comportamiento errático, con confianza en las elecciones y procedimientos, pero con bajos valores en los partidos políticos. En este punto tal vez se encuentre uno de los problemas principales del sistema de partidos sobre el cual me extenderé más adelante.

⁷ La “tercera ola de la democratización” (Huntington; 1994), generó un conjunto de nuevas democracias que surgen, en la mayoría de los casos, como expresiones *incompletas*, si nos basamos en la caracterización de Dahl (1990), ya que en general son deficitarias en algunos de los ocho requisitos para las poliarquías, como lo son: libertad de voto, expresión y asociación, elegibilidad para el servicio público, derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyos y voto, libertad de información, elecciones libres e imparciales e instituciones que garanticen dichas libertades y derechos. En el transcurso de esta tercera ola democrática, entra en juego en las década de los ochenta, doctrinas económicas neoliberales –consenso de Washington- que privilegia el principio de libertad, sobre todo la económica y de mercado, junto con la lógica del beneficio y la acumulación capitalista, en convivencia con sistemas democráticos, que por lo menos en sus principios, buscan y se basan, en la igualdad. Esta convivencia, genera una desigualdad creciente y la exclusión social, en sistemas democráticos, *incompletos* (O’Donnell, 2006). Hasta el presente, ningún académico ha señalado que la transición chilena haya generado una democracia incompleta.

Finalmente, sobre el grado de organización debe decirse que los partidos chilenos están bien organizados a nivel nacional y local, y sus direcciones cuentan con herramientas políticas e institucionales para hacer cumplir sus lineamientos en el Congreso y en otras arenas políticas.

En suma, el grado de institucionalización de los partidos chilenos otorga, previsibilidad a los resultados electorales, sin cambios importantes en la cantidad de partidos, ni la aparición de partidos coyunturales y oportunistas. Como desventaja, en Chile se afirman los extremos izquierda-derecha, donde el clivaje autoritarismo-democracia ha tenido persistencia y más centralidad. Esta institucionalización de los partidos, favorece la gobernabilidad, fortalecida cuando el Ejecutivo cuenta con mayorías propias. El sistema electoral y las preferencias de los electores favorecen las existencias de mayorías en las cámaras, que pueden no ser permanentes porque se construyen en base a coaliciones de partidos. A lo anterior, se le suma, que la pluralidad de partidos, institucionalizados y competitivos, condiciona las propuestas, estrategias y desarrollo de los gobiernos, que se hace más exigente cuando la elección presidencial es mayoritaria, pero encuentra partidos establecidos, fuertes y con historia. (Lanzaro, 2010)

Con el retorno a la democracia, se produce la irrupción y reconfiguración de nuevos actores, como lo son segmentos de la *intelligentzia* y la *tecnocracia*, que configura a la sociedad chilena en tres bloques: una izquierda y derecha representada en las coaliciones, y la novedad de una tecnocracia y pensamiento tecnocrático, directamente vinculada a la toma de decisiones⁸. Una tecnocracia y un pensamiento tecnocrático, al cual se debe recurrir para la formación de alianzas electorales entre partidos con programas y propuestas muy definidas y no siempre comunes, y como forma de contrarrestar debilidades programáticas y de cultura institucional, que se genera a la interna de las coaliciones (Pérez-Díaz, 2008). Sobre la influencia de este fenómeno nos detendremos en el capítulo 3.

2.3. Un sistema político que limita la representatividad de la sociedad.

⁸ Este fenómeno tiene antecedentes en gobiernos democráticos anteriores al régimen militar, pero se potenció en la década de los ochenta, por las políticas neoliberales y desarrolladas en América Latina y en particular en Chile, con base en la escuela de Chicago y el consenso de Washington, y que tiene como efecto suavizar las relaciones entre los actores políticos, y acostumbramiento a la alternancia de gobiernos

Sartori (1979) plantea que en multipartidismos polarizados, con extremos fuertes ideológicamente, el principal impulso del sistema es a formar alianzas en sentido centrífugo, es decir que aquel partido que ocupa el centro del eje izquierda-derecha actúa como eje articulador de las posibles alianzas y donde ese centro no representa por sí mismo una tendencia mayoritaria. Este formato determina un sustento electoral frágil e inestable en función del no apoyo a los candidatos de izquierda y derecha. El hecho de que en Chile, la presidencia y su poder fuera el principal premio, impulsó a los partidos del centro, en función de su debilidad electoral, a demandar votos de los extremos. Si tenemos en cuenta que hasta el 1973, el congreso decidía en el caso que ningún candidato superara el 50% de los votos, las coaliciones ganadoras eran determinantes después de las elecciones. Acuerdos de este tipo llevan a Salvador Allende a la presidencia, pero también debilitaron la gobernabilidad.

La modificación de la Constitución de 1980 incorporó la segunda vuelta con la pretensión de corregir la emergencia de presidentes minoritarios. Sin embargo, este método de elección no asegura la fortaleza parlamentaria del presidente, ya que terminada la carrera por la presidencia, nada asegura que los acuerdos y coaliciones se mantengan en el tiempo.

Las observaciones desarrolladas en el párrafo anterior, serían preocupantes en un entorno de democracias débiles e inestables. La democracia chilena no hubiese durado tanto tiempo, sino valoramos en su justo término, que ésta política de coaliciones y acuerdos permitió la generación de una democracia duradera, con logros importantes y respeto a instituciones y procedimientos constitucionales. En la década del noventa, el sistema de partido chileno logró sortear sin demasiadas dificultades los escollos heredados del régimen militar, pesen a haber manteniendo una estructura partidaria no muy diferente a la anterior a la dictadura.

Con el fin de reducir la fragmentación del sistema de partidos y como forma de asegurar a la derecha una importante representación en el Congreso, se introdujo un sistema electoral con circunscripciones que permite elegir dos representantes, pero donde cualquier competidor que alcanza un mínimo de 33,3 por ciento de los votos consigue asegurar una banca y por el contrario, ningún competidor que supere 66,6 por ciento de los votos podrá obtener las dos bancas en disputa. Este formato de competencia aseguró un claro beneficio para las segundas fuerzas electorales, y obligó a los partidos a consagrar complejos acuerdos y alianzas por distritos, como forma de asegurar bancas propias y evitar la obtención de bancas de la oposición. La ley electoral no condujo a la reducción del número de partidos, ni modificó la tendencia tripartita de la sociedad chilena, simplemente la congeló. La configuración del congreso luego de las elecciones de 1990, refleja con bastante claridad a los tres sectores ideológicos de la sociedad chilena.

Desde ese entonces, el sistema político chileno tiene: 1) un presidencialismo fuerte en términos institucionales, 2) un Congreso elegido por el sistema binominal con 38 bancas en el Senado y 120 en Diputados, 3) un sistema multipartidista, con un alto nivel de fragmentación, 4) niveles de abstención importantes que crece en las elecciones legislativas que no coinciden con la presidencial y en las municipales.

Cuando un presidente poderoso carece de apoyo en alguna de las cámaras, los incentivos de la oposición para bloquear al gobierno son importantes, aumentando la probabilidad de conflictos entre poderes y partidos. Bajo estas condiciones, el gobierno debe adecuar sus propuestas al posible veto del congreso por lo cual la probabilidad de alterar el status quo se vuelve extremadamente baja.

En estos años, eso ha ocurrido con frecuencia y muchos temas han permanecido stand by debido a la inexistencia de una mayoría capaz de transformar determinadas áreas de políticas. A eso se suman algunas reglas internas del Congreso, como la que exige 4/7 de la cámara para aprobar reformas a leyes orgánicas, mayoría que jamás se podrán alcanzar sin un pacto entre el gobierno y la oposición. Un Congreso, con diferencias entre gobierno y oposición, se vuelve inoperante ante la necesidad de introducir cambios en determinadas políticas como por ejemplo la educación.

Si además tenemos en cuenta que la abstención es superior al 40% y que por esa razón, un presidente electo en segunda vuelta (con algo más del 50%) consigue sólo un apoyo real de entre el 25 % y el 30% del electorado, se comprenderá que la gobernabilidad es muy complicada por más que los partidos sean fuertes e institucionalizados. En un escenario de fuertes demandas la capacidad de respuesta del sistema político resulta extremadamente baja.

Cambios que se hacen necesarios

En las últimas elecciones municipales, apenas un 40% de los que podían votar lo hizo, ya que el sufragio era voluntario⁹. Se puede argumentar que la obligatoriedad del voto cuando existe pertenencia a la comunidad, sentimientos de responsabilidad por el futuro compartido, o porque la democracia sencillamente necesita de todos. Sin embargo, el voto no es obligatorio y una parte importante de los jóvenes sienten que el *juego está arreglado y ya se conoce el final* por lo que participar carece de atractivo. De este modo, el sistema político lentamente pierde legitimidad y la población comienza a ver distantes a los partidos y sus dirigentes. Si a esto se agrega la presencia de cuadros tecnocráticos para la formulación, instrumentación y desarrollo de políticas públicas, -económica, educación-, con el mercado como regulador, se comprenderá que la democracia en Chile está ante un gran dilema.

⁹ Este trabajo fue escrito antes de las presidenciales de diciembre/enero de 2013/2014.

Tras la restauración, el concepto de democracia pierde sus connotaciones rousseauianas, en lo referente a la participación igualitaria en los procesos de toma de decisiones y adquiere una visión más schumpeteriana de la democracia, como método que permite arribar a decisiones políticas y donde la participación se limita al voto. (Silva 1997). En la nueva democracia chilena, la legitimidad de los gobiernos electos pasa no sólo por satisfacer las demandas de la de la población – empleo, educación, vivienda- y también mantener los equilibrios macroeconómicos.

Teniendo en cuenta que el voto es obligatorio pero la inscripción en el registro electoral no lo es, una importante parte de los jóvenes decide no votar ni participar en la toma de decisiones, por lo que se deberían crear mecanismos que alienten la participación, de manera que todos los actores políticos y a quien representan no se sientan relegados en la toma de decisiones. La respuesta histórica ha sido aumentar las potestades del presidente y del ejecutivo en la búsqueda de gobernabilidad, cuando quizás la fórmula más adecuada sea aumentar la participación de los electores, el papel del Congreso y el enraizamiento de los partidos.

El sistema de elección binominal cumple un rol importante en este esquema, al reducir la incertidumbre y aumentar el desinterés por la competencia política. Dada sus características, deja sistemáticamente fuera de la vida política a partidos menores pero que en algunos casos alcanzan al 10% del electorado y hace predecible los resultados electorales. Recordemos que para que una coalición electoral se quede con las dos bancas en disputas de una circunscripción, debe alcanzar el 67% de los votos, situación extremadamente inusual si se observan las series electorales desde los años noventa. Navia (2005) afirma que en promedio solo el 15% de los distritos generan algún tipo de expectativa en este sentido, en tanto en el resto ya se sabe de antemano que cada uno de los principales bloque se quedará con una banca. Por tanto, en las elecciones legislativas la competencia es baja y la incertidumbre mínima (ni siquiera existe la incertidumbre de qué partido del bloque se quedará con el escaño pues el refinamiento estratégico ha llevado a las coaliciones a combinar candidatos fuertes con candidatos débiles).

Asimismo, en un sistema fuertemente presidencialista como el chileno debería verse como necesario introducir mecanismos de democracia directa en los cuales la ciudadanía encuentre forma de expresión y genere frenos a un fuerte presidencialismo o a un sistema cuasi congelado como el actual. Fue importante que en un sistema multipartidario y polarizado, haya reducido el mandato presidencial, facilitando la rotación y validez de los apoyos y cerrando el paso a gobiernos e individuos que quieran estar por fuera del sistema gobernando sin apoyos partidarios ni legislativos.

Por otra parte, los logros económicos de Chile luego de la dictadura, que tienen su origen en cambios planificados y realizados durante los años de autoritarismo, han dado al sistema político posterior un marco apropiado para la sustentabilidad del régimen democrático. Pero en el debe de este éxito económico, -un crecimiento del PBI muy por encima de la media de América Latina – queda la distribución de esta riqueza generada, que ubica a Chile, en lo referente a la distribución del ingreso con valores del coeficiente de Gini con valores similares a los Bolivia y Nicaragua, con un alto grado de desigualdad. (Latinobarómetro, 2005)

De la misma forma que la buena marcha de la economía no fue determinante para la búsqueda de una salida hacia un sistema democrático, tampoco puede ser el único determinante que lleve a una crisis de dicho sistema; pero un cambio importante en el desarrollo económico puede crear inestabilidad, y polarización de un sistema de partido, originalmente con tendencias centripetas, erosionando una clase media fuerte políticamente, y relativamente segura económicamente. (Altman, 2001)

3. EL FACTOR EDUCATIVO –TECNOCRÁTICO

El presente apartado busca desarrollar el vínculo entre la educación y la tecnocracia, no porque esta última suponga una característica exclusiva de la educación. La reforma educativa planificada en dictadura aleja a la educación de lo político y potencia la emergencia de tendencias tecnocráticas.

Toda economía exitosa determina el tipo de vínculos entre la producción, el mercado y el Estado. En ese contexto, las políticas de vivienda, salud y educación –fundamentales para toda sociedad en desarrollo- pasan a ser reguladas por el mercado y el Estado se transforma en un simple fiscalizador y financiador, con escasa competencia, autoridad y control.

En ese marco, los resultados de una política educativa desarrollados bajo ese concepto, determinan la emergencia de un actor que interpela al sistema político. Mientras que educación y tecnocracia encontraron un vínculo virtuoso en el Chile post-Pinochet, educación y movimiento estudiantil manifiestan un vínculo complejo que dejan al descubierto los problemas de la democracia.

3.1 Dimensión educativa

El movimiento estudiantil chileno tiene su origen en las demandas sobre las políticas educativas, la asignación de recursos, la igualdad y equidad, y la búsqueda de una educación de calidad. En el año 2006, el movimiento estudiantil con base en el sector de secundaria, pone en debate las preguntas de fondo y las desigualdades que produce el sistema educativo, que en palabras de María Huerta, vocera de los estudiantes, cuestiona las posibilidades que tienen ricos y pobres en el presente sistema educativo y manifiesta la molestia generalizada ante la diferencia en los resultados de las pruebas. La lucha es *“por un derecho a la educación y no por un privilegio”* (Martínez, 2012)

El reclamo tiene evidentemente una base objetiva. Durante los últimas tres décadas, y con complicidad de gobiernos, se ha implementado un modelo de desarrollo que otorga importancia superlativa a la creación de riqueza, más allá de su distribución, aumentando las distancias entre grupos sociales. A modo de ejemplo, en el acuerdo en materia educativa, alcanzado en el 2007 entre la derecha y el gobierno de la Concertación, se reproducen los intereses gremiales de las elites y se mantienen los pilares de una educación mercantilista, privatizadora, tecnocrática y segregacionista.

Una educación mercantilizada

En Chile, las políticas macroeconómicas que favorecieron el crecimiento de la economía fueron complementadas con políticas focalizadas hacia los grupos más vulnerables, que poseen un carácter compensatorio, logrando reducir el número de pobres en un 50%. Sin embargo, este dato alentador se contrarresta con la evolución de la distribución de la riqueza que muestra que el promedio de los ingresos del décimo decil es 25 veces mayor al del primer decil y que el 70% de la población recibe ingresos inferiores que el promedio nacional.

La reforma educacional, promovida por el régimen militar, buscaba expandir el sistema abriendo la posibilidad de creación de nuevas universidades e institutos técnicos. Pero, además de ampliarlo y en la búsqueda de diferenciarlo y segmentarlo, se crean institutos *Particulares Subvencionados* con un financiamiento mixto proveniente del Estado, fuentes privadas y los propios estudiantes, y *Particulares Pagados*, con un financiamiento completamente privado. La tendencia de los últimos años, ha sido al incremento de los establecimientos *Particulares Subvencionados*, en algunos casos con proyectos excluyentes en lo referente a la selección de docentes y estudiantes, que puede ser económica y/o intelectual, discriminando en forma consciente o no, que reproducen muchas veces la separación social y la estructura de privilegios en términos de resultados, calidad y posibilidades (Valenzuela 2008). Los estudiantes de nivel socioeconómico más bajo están expuestos a docentes no siempre matriculados, con menos calificación, de mayor rotación y con menos expectativas y aspiraciones. Es posible que el destino laboral del estudiante tenga estrecha relación con la institución que realiza sus estudios. (Cox, 2012; Valenzuela, 2008).

El sistema educativo chileno instrumenta el llamado *modelo de mercado*, donde el mercado tiene un rol central en la provisión de servicios públicos y el Estado un rol marginal. La dictadura chilena introduce reformas que trasladan la gestión de la enseñanza del Ministerio de Educación a los municipios, introduciendo mecanismos de financiación basados en el subsidio según la demanda que tengan las instituciones educativas y que no siempre van acompañadas de una enseñanza de calidad¹⁰ (Mancebo, 2012). En el modelo de mercado, el sistema educativo se gerencia con un fuerte componente tecnocrático y con poca o nula participación política. El sistema no necesariamente favorece la equidad, ya que las familias no siempre tienen un acceso igualitario a la información. El financiamiento requiere una atención importante, ya que los recursos destinados por

¹⁰ El sistema educativo chileno, en lo referido a la enseñanza básica y media, cuenta con aproximadamente 12116 establecimientos, de los cuales, 5840 son municipales, 5536 son colegios particulares subvencionados, 681 particular pagos y 70 de corporaciones de administración delegada. Como fortaleza tiene el dar cobertura universal de enseñanza primaria y secundaria (98%), y como debilidad la caída de la matrícula municipal, a valores por debajo del 30%, con alguna explicación en las movilizaciones del 2011, que se prolongaron por 8 meses, junto con los pobres resultados en institutos municipales y particular subvencionados. (Espinoza 2012)

el Estado a las universidades y a las becas, no permiten financiar la totalidad de los gastos, con arrastre a la economía y el endeudamiento familiar. (Mancebo, 2012; Espinoza, 2012)

Para su instrumentación, puesta en funcionamiento y desarrollo, la presencia tecnocrática es determinante. Se instaura el sistema de autofinanciamiento con pautas marcadas por el Banco Mundial, para países que hayan pedido financiamiento al banco y llevada adelante por economistas y educadores formados en EEUU (Martínez, 2012).

El manejo tecnocrático de la educación muestra déficits y frenos que terminan por alentar la continuidad de las movilizaciones de protesta. Algunos ejemplos: En el intento de mejorar la educación, a fines de los noventa se crea un Consejo Asesor Presidencial como respuesta a las primeras movilizaciones de estudiantes de secundaria. En los informes producidos por este ámbito se contempla la calidad de la educación, que se la asocia al desarrollo humano, orientada al fortalecimiento de la vida democrática y definiendo indicadores de cobertura, logros educativos, calidad de procesos educativos, financiamiento e inversión. El informe reconoce también el contrasentido en la exigencia de demanda de libertad de enseñanza y derecho a la educación, sin control de calidad de los institutos que la brindan y los fines de lucro perseguidos. Se reconoce la falta de mecanismos, que permitan evaluar y asegurar la calidad, como también el reconocimiento de que las realidades, soluciones y expectativas dependen de las ciudades como territorio. (Valdebenito, 2011) La creación del consejo -en la búsqueda de dar cauce al movimiento estudiantil- integrado por tecnócratas vinculados a la educación, con la finalidad de *“llegar a una educación justa y de calidad que Chile quiere y necesita”* fracasa dando lugar a la creación de una comisión político-técnico, con integrantes del Gobierno y oposición, pero excluyendo a los movimientos sociales, partidos extraparlamentarios, padres, profesores, estudiantes; propone ajustes al sistema educativo, pero sin modificación sustancial en los temas de fondo. Esta comisión también fracasa por insistir con la visión técnica, racional, individualista, excluyente y poco propensa al dialogo de sus integrantes. (Martínez, 2012; Cox, 2012; Valenzuela, 2008).

La economía de mercado no asegura calidad de enseñanza, y la elección de instituciones para la calidad del sistema educativo, no siempre va acompañada de la calidad y nivel de la institución, y sí de estatus y vínculos. En el mercado de la educación en Chile, la competencia desregulada genera un conjunto de posibilidades que no siempre priorizan calidad, donde los individuos pueden optar por establecimientos disímiles, donde el Estado se desentiende de la fiscalización y no tiene injerencia. Los establecimientos del sistema privado de educación, generalmente pertenecen a personas jurídicas de derecho privado, que a partir de la libertad de enseñanza, garantizada constitucionalmente, pueden definir su propio proyecto educativo e

invocarlo como guía diferenciadoras, para la selección y permanencia de los estudiantes, el perfil educativo y socioeconómico.

En la educación superior, la cobertura ha crecido fuertemente lo cual es atribuido a la mayor oferta privada, pero el aumento del alumnado no está acompañado por el incremento en el gasto por alumno. El financiamiento de la enseñanza superior a diferencia con otros países, es fundamentalmente privado, con porcentaje importante proveniente de los hogares de los estudiantes, lo cual determina un sistema educativo altamente segregado, donde no es frecuente que alumnos de grupos económicos bajos estudien con alumnos de grupos altos y donde también se da una fuerte segregación residencial. Los colegios particulares subvencionados muestran una mayor diversidad en función del quintil de procedencia, mientras que las instituciones municipales, si bien tienen más alumnos vulnerables, también son más segregadas. Consecuencia de lo anterior, es que estudiantes con antecedentes familiares y/o culturales de niveles bajos, tienen un déficit educacional que no siempre es compensado por la institución. El sistema educativo chileno muestra mejoras y mejor funcionamiento que otros de la región, pero presenta problemas de calidad, integración y mala distribución de los recursos públicos y privados. En una sociedad desigual e inequitativa, el sistema educativo es reflejo de ella por lo cual se hace difícil instrumentar soluciones. Esta exclusión, impide a los individuos y grupos el acceso a posibilidades de subsistencia autónoma, dentro de los niveles sociales determinados por el contexto y las instituciones, limitando su inserción laboral y descalificándolos. (Castells 1996)

3.2. Dimensión tecnocrática

La transición chilena a la democracia coincide con el importante desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información y con el derrumbe del modelo socialista. Estas nuevas tecnologías, traen como consecuencia nuevos elementos y formas que hacen al vínculo y desarrollo de los ciudadanos, pero no modifican sustancialmente los objetivos de la política: ayudar al ciudadano a abrirse camino, a enfrentar las transformaciones en lo personal y grupal, a potenciar su vínculo con una sociedad más diversificada, vinculante, con nuevos derechos adquiridos y nuevo relacionamiento con el entorno.

Tecnocracia en el siglo XXI

El estudio de la tecnocracia en sistemas democráticos es deficitario. El fenómeno, en particular, en altos niveles de gobiernos no es nuevo en América Latina. En la década de los

sesenta, en los gobiernos autoritarios de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, adquiere visibilidad y centralidad, como instrumento para el desarrollo de políticas económicas, que en la mayoría de las veces, son digitadas desde el exterior. En la transición a la democracia el estudio del papel político de los tecnócratas se vio complejizado por tratarse de transiciones políticas y económicas simultáneas. En la actualidad, la tecnocracia y su influencia sobre los gobiernos se verifica en el contexto de un mundo interconectado, globalizado, bastante diferente al de hace veinte años. El fenómeno de la tecnocracia se fortifica con la globalización y desarrollo de las comunicaciones y tecnología, que determina cambios políticos, económicos, sociales y culturales y consecuencia de ello, el papel que cumplen los Estados.

Esta globalización supone a los individuos y sociedades afrontar nuevos desafíos: a) expansión del individualismo; b) la política, al igual que otras manifestaciones de la sociedad, está teniendo lugar por mecanismos no conocidos o poco desarrollados en las democracias contemporáneas; c) la necesidad de tomar en cuenta y desarrollar nuevos desafíos- estrategias ante problemas ecológicos; d) nuevos desafíos frente a derechos de minorías étnicas, emigración, diversidad; e) desarrollo de la ciencia y tecnología, aplicada al esparcimiento y comunicación. (Redes sociales). Estos desafíos redefinen las representaciones políticas, como también las identidades culturales, religiosas y étnicas, en clara lucha de intereses entre valores globales y locales. En éste “*nuevo mundo*” las formas de administración económica, social y cultural, se han debilitado o modificado sustancialmente disminuyendo la distancia entre lo público y lo privado, lo general de lo individual.

La nueva sociedad en formación, incluye una sociedad civil que está cambiando, que es diferente y donde los cambios se producen cada vez en forma más rápida y drástica y determina un nuevo rol del Estado y sus gobiernos. Estos cambios, pasan por una descentralización de las funciones del Estado, por la expansión de la esfera pública, un nuevo o por lo menos diferente rol de los partidos políticos y su vínculo con la sociedad, diferentes formas de sindicalismos y una mayor eficiencia administrativa del Estado. El acceso de estamentos tecnocráticos al funcionamiento del Estado, lo modifica: pasamos de dirigente representante al de dirigente especialista, pero no siempre representante. El tecnócrata, a diferencia del burócrata, es dirigente y especialista sin ser representante y en algunos casos ni siquiera funcionario por la ausencia de formalidad en su inserción en el Estado, y por estar muchas veces por fuera de la institucionalidad. El tecnócrata no tiene un pie en la política y otro en la técnica: cree tener la capacidad operativa y de toma de decisiones, en razón de sus argumentos técnicos, y la política es apreciada como un espacio de lucha de poder, lejos de la racionalidad. (Mayol, 2003). La diferencia entre un político tradicional y un tecnócrata, es la base en la naturaleza de su influencia: para los primeros su

legitimidad surge de las elecciones competitivas, para el tecnócrata la fuente de su legitimidad es el entrenamiento académico especializado. Ésta progresiva complejización y diversificación de las sociedades, muchas veces conduce a la primacía de la racionalidad técnica sobre la política determinando un paulatino desplazamiento de lo político como herramienta de cambio. (Orjuela, 2000))

Las posturas tecnocráticas manejan como premisas: a) la imagen del Estado, de la sociedad y de las sociedades sectoriales como sistema; b) la convicción de que tales sistemas deben ser orientados según principios de la razón técnica; c) el argumento de que los conocimientos adecuados a la dirección del Estado son proporcionados por disciplinas cuyas conclusiones son validas y aplicables a distintos sistemas; d) la imagen de que para cada problema existe una solución optima, con lo cual se evitan discrepancias; e) la recomendación de que la estructura político-institucional debe adaptarse a las exigencias de la razón. La mentalidad tecnocrática es racionalista, científica, elitista, objetiva y la tecnocracia, en términos políticos clásicos, es una forma de gobernar, donde los expertos técnicos, por su posición dominante en las instituciones, gobiernan por su conocimiento especializado. (García Pelayo en Mayol, 2003)

Tecnocracia en Chile

La presencia de tecnócratas, -en la realidad política de América Latina y en Chile en particular-, no supone únicamente a la presencia de cuerpos técnicos en el gobierno, sino que también hace referencia a la influencia de una ideología determinada. En gobiernos militares de los setenta, los regímenes *burocrático-autoritarios*, la presencia de economistas fue generalizada. (O'Donnell, 2009). Para estos gobiernos y sus tecnócratas, existen valores del conocimiento científico superiores a los del debate político: el mercado es determinante para llegar a la mejor resolución de dicho conocimiento y no puede ser perturbado por el conflicto político y social. Entre militares y tecnócratas siempre existió una fuerte afinidad: la fe en soluciones técnicas y apolíticas, era acompañada por un fuerte rechazo a todo lo vinculado con la política y política de partidos

En Chile, desde los años veinte del pasado siglo¹¹ los tecnócratas tienen influencia en el Estado ocupando posiciones estratégicas como mediadores entre sociedad y políticos, dando garantías mínimas de buena administración de recursos, lo que les otorgó fuerte autonomía, alejados de la política y políticos. Es equivocado asociar el fenómeno tecnocrático únicamente al

¹¹ El Coronel Ibáñez en los años veinte, busco instaurar un sistema tecnocrático autoritario, con base en jóvenes ingenieros; en el gobierno autoritario de Pinochet, la presencia de tecnócratas, fue fundamental en la planificación y ejecución de las políticas económicas y educativas, con técnicos y profesionales que se luego de la dictadura, mantienen su cuota de poder e influencia. Con la llegada del Frente Popular de Allende, en el marco de importantes vínculos con orientaciones estructuralistas, con apoyo de la CEPAL, se crea CORFO, donde los ingenieros tienen papel relevante, con apoyos del sector empresarial, que desconfiaba del el creciente papel del Estado. (Silva 2010)

autoritarismo, ya que gobiernos democráticos como el de Frei Montalva (1964-1970) o Salvador Allende (1970-1973) se constituyeron con cuadros “*técnicos*” para la formulación y ejecución de sus propuestas económicas y sociales. Durante la dictadura, si bien en general, no participaron directamente de políticas partidarias, si marcaron influencia mediante el sector gremialista vinculado a la derecha.

La influencia de los tecnócratas luego de Pinochet, se vincula al rol que juegan los expertos en economía en el proceso de reinserción de los partidos de izquierda en la política democrática, ya sea desde la política partidaria o desde los centros de estudios partidarios ligados a la izquierda y centro izquierda, donde se desarrollaron lineamientos de políticas públicas, posteriormente aplicadas. La credibilidad lograda, permite al grupo de tecnócratas ser partícipes de los diferentes elencos de los gobiernos post dictadura. La clase media veía también en el conocimiento y la tecnocracia una manera de romper barreras sociales, para su llegada a los ámbitos del poder. (Silva, 2010) (Avendaño, 2011).

Por la forma de la transición, los tecnócratas vieron restringido su campo de acción. Una vez consolidadas las alianzas políticas y la paulatina eliminación de los enclaves autoritarios del sistema jurídico, la economía retoma su centralidad, y con ello los tecnócratas encuentran una ventana de oportunidades. A la creciente importancia de éstos, se agrega un fuerte debilitamiento de las fuerzas que tradicionalmente se le oponían, como podían ser los partidos tradicionales de izquierda. Para estos partidos, negar a los tecnócratas, era presentarse ante sus electores, como enemigos del éxito de Chile y llevar sombras sobre el futuro de la nueva democracia.

Recurrir a tecnócratas y las soluciones tecnocráticas, fue una constante en los gobiernos posteriores a la dictadura en Chile, como también para la mayoría de las nuevas democracias latinoamericanas de la *tercera ola*, ya que la apertura trae consigo una agenda de políticas económicas neoliberales que determinan orientaciones y colaboraciones tecnocráticas para políticas y cargos fundamentales, brindando visibilidad ante la sociedad y autonomía relativa frente a sindicatos, partidos políticos y empresarios (Silva 1997). Los líderes políticos, recurren a los tecnócratas, como forma de legitimación ya sea como asesores, formando equipos de trabajo o produciendo informes, pero que no siempre conducen a resultados factibles de llevar a la práctica.

Desde entonces, los tecnócratas chilenos han desempeñado un papel estratégico en la conducción de negociaciones tendientes a obtener créditos y ayuda financiera en el exterior, pero además por tener antecedentes académicos comunes con expertos financieros extranjeros, lo cual permite legitimar su presencia en puestos claves. El mantenimiento de las políticas económicas de

la dictadura fue una constante en democracia; para los nuevos gobiernos cambiar determinadas políticas, -como la económica y la educación- en el contexto de una democracia aun débil podía conducir a crisis no queridas o generar descontento y desconfianza en lo interno y externo.

Para los gobiernos electos, el tener un buen equipo económico, con figuras tecnócratas, suponía un factor fundamental para lograr el apoyo y la credibilidad de una parte importante de la sociedad chilena. Ello supone que la tecnocracia logro permear los aspectos valorativos de la cultura política de la población, dada la creciente aceptación del saber técnico-económico por sobre la política. Esto trae consigo un lento desprestigio de políticos tradicionales e instituciones, fenómeno alentado muchas veces por las propias políticas tecnocráticas.

Por tanto, los gobiernos post-dictadura administran un esquema donde la clase política tradicional administra las demandas y los tecnócratas se ocupan de las macro políticas y de las señales al mundo de los negocios y las finanzas. Los partidos políticos que en el pasado se eran los principales mecanismos de reclutamiento para el acceso a puestos de gobierno, dejan espacio al ingreso de personal legitimado por criterios meramente tecnocráticos. Junto con el debilitamiento de los partidos, se da la lenta retirada de los estamentos intelectuales clásicos, que alentaban muchas veces una visión crítica hacia la política y los partidos (Silva 2010; Avendaño 2011).

Los gobiernos chilenos de la transición fueron exitosos y sin embargo para sectores de la población, el desencanto con la política parece ir en aumento. Más que desencanto, parece ser acostumbramiento, conformismo, memoria histórica y triunfalismo, que los estudiantes no comparten por ser una generación posterior a Pinochet, educada en otro contexto, con otros valores, -quizás producto de esta misma educación- y no siempre consiente de los dramas del pasado. (Somma 2013)

4. MALDITA HERENCIA¹²

Las elecciones municipales¹³ del 2012 y las recientes nacionales chilenas, confirman las alertas ya manejadas, que apuntan al divorcio entre la institucionalidad política y la sociedad: seis de cada diez chilenos se abstuvieron de emitir sufragio, en una de las mayores deserciones electorales, en un sistema con inscripción automática al registro electoral, pero con voto voluntario.

Un sector importante de los jóvenes, ve en la *clase política*, a una “*casta parásita*”, y en el imaginario ciudadano, se ve en “*el político a un personaje aborrecible*” al cual sólo le interesa “*lo personal sobre lo general*”. El lema de los estudiantes “*Yo no presto el voto*”, es ya de por sí, un gesto político explícito.¹⁴

El *no voto* y la abstención de parte de los jóvenes es reflejo de silencio, ausencia, deserción, y un llamado de atención al sistema político: las reglas de juego, no satisfacen ni atraen a una parte importante de la ciudadanía. Las reformas no fueron pocas ni de poca importancia y han eliminado los componentes heredados de autoritarismo y que hacían a una *democracia protegida y autoritaria*. Sin embargo, en palabras de Camila Vallejo, referente estudiantil “*La constitución es autoritaria, antidemocrática y no cuenta con legitimidad alguna, los cambios necesarios son muchos, partiendo por asegurar el derecho a la educación, reforzar el rol del Estado, modificar el sistema tributario, el sistema político y por último el económico*”.¹⁵ La frase resume críticamente las dimensiones analizadas.

La experiencia de la transición en Chile, muestra que el sistema multipartidista es compatible con la democracia, pero no colma las expectativas de las nuevas generaciones nacidas e inmersas en otra realidad. La democracia se consolidó en base a un modelo neoliberal, una cultura individualista y consumista y el debilitamiento de los vínculos tradicionales de representación e intermediación (Somma, 2013). Los gobiernos de la transición, han tenido una estricta y cuidadosa disciplina en lo referente a lo fiscal, que permite el desarrollo y la consolidación de las políticas educativas y económicas, inclusive en momentos de crisis, sin experiencias traumáticas que retrotraigan a las del pasado.

La transición democrática, se construye a partir de tres ejes articuladores: la comunidad política, (*polity*), la política (*politics*) y las políticas públicas (*policies*), implementadas por los diferentes gobiernos post-dictadura, donde las dimensiones económicas, educacional, político

¹² Tomado de las movilizaciones de estudiantes.

¹³ <http://www.elecciones.gov.cl/>

¹⁴ En cursiva contenidos de carteles en las movilizaciones estudiantiles en el 2013

¹⁵ Entrevista a Camila Vallejo, en www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4540 del 06/11/2011

institucional e histórica, son centrales. Sin considerarlas adecuadamente, no se comprende la actual situación. En la búsqueda de la explicación del descontento, se glosan algunas de estas modificaciones, cómo han impactado en el sistema político chileno y la ciudadanía. Estos puntos comentados a continuación, son elementos ineludibles al considerar la emergencia de la crítica a la política por parte de los jóvenes, magnificada por nuevas formas de comunicación e interacción, en el entorno de comunidades inmersas en nuevas tecnologías de la comunicación que modifican *el sentir y el hacer* de la política.

En la hipótesis planteábamos que *“la incapacidad de entender y canalizar problemas de la sociedad chilena, se debe en gran medida a una forma hegemónica de gobernar y canalizar demandas, basadas en lo técnico y racional, más allá de percibir los problemas y sus posible soluciones desde lo político. A cuestiones propiamente políticas, últimamente se las quiere enfrentar como meros asuntos técnicos, destinados a ser resueltos por expertos, que en la mayoría de los casos están por fuera de lo político. Este fenómeno sería consecuencia de la herencia del régimen de Pinochet, que tiene en algunos puntos de la Constitución de 1980 una causa excluyente, que determina la forma y el tipo de transición, y que a diferencia de otras transiciones, limita y restringe los cambios en el status quo. Las movilizaciones por cambios en la educación son una prueba fundada: van más allá de lo coyuntural y responden al déficit e incapacidad del sistema político chileno actual para representar y proponer cambios profundos a la situación generada”*.

En los próximos apartados buscaremos persuadir al lector acerca de la consistencia de esta explicación y para ello se enfocará el problema a partir de las herencias institucionales, históricas, económico-educativas y tecnocráticas, factores que parecen estar en la raíz del creciente malestar político.

4.1. Herencia institucional

La reforma constitucional de la transición buscó el restablecimiento de la representación política junto con la supremacía de lo civil sobre lo militar. Estas modificaciones fueron positivas para alumbrar un régimen democrático, pero en la actualidad lucen como limitadas. El proceso de democratización y reformas, ha sido gradualista y con cambios incrementales, que pueden explicarse por la naturaleza de la transición: un gobierno autoritario de larga duración, introdujo profundos cambios económicos y sociales, logrando un desempeño relativamente satisfactorio a diferencia de lo sucedido con otros autoritarismos de la región. Ello le permitió negociar un cambio

de régimen donde persisten estructuras institucionales de su preferencia. Este hecho lleva a algunos autores a señalar al proceso post-dictadura como una “*democracia incompleta*” (Garretón, 2010) o un presidencialismo “*semi-soberano*” (Huneus, 2012). La transición, en el caso chileno, se configura por la vía de la *reforma*, y por una institucionalidad programada y dispuesta por el régimen militar, con profundas continuidades estructurales y personales, que tiene como eje principal, el mantenimiento de determinadas políticas económicas, sociales y educativas, además, entre otros, nombramientos vitalicios para el Congreso.

Es una institucionalidad impuesta por la dictadura, con gobiernos elegidos libremente y con todas las libertades públicas, pero con *enclaves autoritarios* heredados, que restringe la democracia, mediante *podere fácticos*, es decir al margen de los sistemas democráticos clásicos.

La sociedad chilena, se enfrenta desde entonces a fuertes contradicciones: por un lado la exigencia de más libertades políticas y por otro, no cambiar las políticas que funcionan adecuadamente. En ese marco los partidos políticos, de innegable influencia histórica en la sociedad chilena, se impregnan de la cultura política dominante lo cual los debilita. El sistema electoral no los ayuda a mejorar la representatividad y la legitimidad pues la baja competencia los aleja de la ciudadanía

La Constitución vigente fue aprobada en el plebiscito de setiembre de 1980 y enmendada en julio de 1989, cuando el país se encaminaba a la apertura democrática. Las modificaciones introducidas en esa oportunidad además de buscar reequilibrar las relaciones entre ejecutivo y legislativo, dieron lugar a un sistema político más complejo. Los cambios buscaban fortalecer el papel de la oposición, como forma de limitar al futuro gobierno de la Concertación de Partidos. Asimismo, la Constitución establece que la reforma de sus partes esenciales requiere el voto de los dos tercios de la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y dos tercios del Congreso (Cámara y Senado), lo cual supone una súper mayoría solo alcanzable con el acuerdo del gobierno y la oposición. De esta forma, las posibilidades de modificar el status quo sin el concurso de las fuerzas herederas del régimen resultaba una tarea casi imposible.

Las enmiendas alcanzadas en el 2005 son una prueba de este esquema. Se eliminaron ciertas estructuras heredadas como los senadores vitalicios y se acortó el mandato presidencial de seis a cuatro años, gracias a un acuerdo entre todos los partidos. No obstante, esos cambios parecen escasos en un Chile que cambia a pasos agigantados.

El sistema binominal, en particular, puede ser considerado como uno de los factores que originan el malestar con la política y las movilizaciones. El sistema limita la representatividad,

porque excluye a una parte de la sociedad que vota a los partidos menores, y facilita las condiciones para la reproducción de la tecnocracia en el manejo y administración del Estado. Además, es un sistema que consagra el empate parlamentario pues favorece a las dos grandes coaliciones que reparten la representación casi en mitades, con sobrerrepresentación de sectores minoritarios. Con un parlamento dividido, la posibilidad de pasar importantes reformas o de enmendar la Constitución es cercana a cero.

Algunos autores insisten en que el sistema binominal carece de legitimidad de origen por ser el último enclave de autoritarismo (Garretón, 2010). Otros, creen que es un dispositivo que busca el consenso y la estabilidad favoreciendo a la oposición (Huneus, 2012; Rubano, 2007). También algunos piensan que es un sistema que limita la representatividad de la ciudadanía, produciéndose una tendencia al empate electoral (Valenzuela 2005). Los resultados de su utilización durante algo más de una década muestran que el sistema reduce artificialmente el número de competidores, generando estabilidad y gobernabilidad en detrimento de la representatividad, la competencia y la incertidumbre. En cierto modo, es un sistema perjudicial tanto para los partidos políticos, como para a quienes representan a estos partidos, ya que restringe la competencia electoral a la interna de los bloques electorales, presiona a formar coaliciones en la búsqueda de obtener alguno de los dos cargos en disputa, y deja fuera de la competencia a los partidos que no pertenecen a las coaliciones. Estos últimos partidos, paradójicamente, apoyan y promueven las movilizaciones estudiantiles que hoy nos ocupan.

El sistema electoral también maximiza el poder de las direcciones, que son las que en definitiva seleccionan a los candidatos, limitando el surgimiento de nuevas y jóvenes figuras. La ausencia de los jóvenes en la política partidaria nivela *hacia abajo* a los candidatos y representantes. Las propuestas de cambios a este sistema, encuentra siempre la barrera de los acuerdos y mayorías necesarias, que el bipartidismo reflejado en el Congreso hace imposible.

Si el sistema electoral erosiona la representación y la atracción de los jóvenes a la política, otro tanto sucede con el Congreso. La composición parlamentarias de las últimas legislaturas, no cuentan con recursos humanos para hacer uso de su poder de influencia, y los parlamentarios hacen un trabajo más en términos asistenciales, que de mecanismos de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. (Huneus, 2012).

Si Chile desea modificar esta situación se deberían procesar modificaciones sustantivas a la Constitución. Algunos ejemplos: a) eliminar o cambiar el sistema binominal; b) eliminar la exigencia parlamentaria de cuatro séptimos de votos en ambas cámaras para modificar o cambiar

ciertos temas; c) el hecho de que la destitución de los ministros sea facultad y responsabilidad única del presidente (el Congreso tiene potestades fiscalizadoras, pero sin consecuencias para la continuidad del ministro); d) el nombramiento de integrantes del Poder Judicial, -que también requiere de quórum altos- que lleva acuerdos que limita, desvirtúa y politiza la justicia, nombrando a integrantes mediocres, que no generen conflictos de intereses, ni asumen responsabilidades, mas cuando las sociedad comienza a ser mas critica con el pasado¹⁶; e) la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, que entrona presidentes fuertemente legitimados frente a un Congreso con déficits de legitimidad. Asimismo, habría que buscar mecanismos de democracia directa, que en la Constitución vigente no están contemplados. (Garretón, 2010; Somma, 2013; Huneus, 2012).

Los perfiles de las candidatas a las elecciones presidenciales del próximo año, son la fiel imagen de las herencias que este Chile ha recibido de la dictadura: las dos son hijas de militares que tuvieron vínculos con la dictadura, Bachelet, de un general que se opuso al golpe, y Matthei de un miembro de la Junta Militar entre 1978 y 1990. Es necesaria una nueva Constitución y un sistema educativo diferente, pero los votos y los acuerdos para estas reformas no son posibles, producto de las mayorías requeridas por un sistema heredado, que buscó la sobre representación de las minorías. Es prioritario un nuevo marco político-institucional democrático, participativo y representativo, para que el sistema canalice las demandas ciudadanas y no deje en manos de la tecnocracia, el manejo político, institucional y educativo.

4.2 Herencia tecnocrática

La tecnocracia, los tecnócratas y el conocimiento experto en los procesos de toma de decisiones no son nuevos en Chile. Los gobiernos de Ibáñez, Frei-Montalva, Allende, llegaron a tener en sus equipos de gobierno, con matices, sus representantes de este tipo. Más acá en el tiempo, la dictadura y los gobiernos de la transición, contaron con técnicos y tecnócratas entre sus colaboradores.¹⁷ Los presidentes nombran a menudo, como forma de disminuir la capacidad de presión sobre su gestión, colaboradores con perfiles tecnocráticos, “*amortiguadores*” entre su gestión y los partidos políticos. Aylwin, porque entendía que su gobierno era de transición, y debía asegurar estabilidad política. Frei Ruiz-Tagle, en primer momento fortaleció lo político por sobre lo técnico, a pesar de su profesión de ingeniero, ya que esperaba surgimiento de demandas

¹⁶ El Poder Judicial, es quien tiene el *deshonor* de no acompañar los cambios. De 10000 recursos de amparo (habeas corpus) presentados ante la Justicia, sólo uno fue tomado en cuenta. (Rosenblat, 2013)

¹⁷ Para profundizar sobre cantidad y calidad de los tecnócratas en los diferentes gobiernos, “Tecnocracia y democracia en el Chile contemporáneo: el caso de los gobiernos de la Concertación (1990-2010).

postergadas, que no existieron, y que abrió el paso a los tecnócratas, que durante un tiempo tuvieron un lugar privilegiado, a pesar del resentimiento de círculos políticos. Lagos, fue el que más desconfió de los tecnócratas, por desencuentro con ellos durante su actuación como ministro de Frei, pero, por sus credenciales socialista. Sin embargo, en la búsqueda de confianza de sectores empresariales y financieros, nombra como Ministro de Hacienda, un tecnócrata con respaldo de la comunidad financiera. Bachelet, a pesar de su fuerte discurso anti-tecnocrático, durante la campaña, designó el gabinete más tecnocrático desde la restauración.¹⁸ El gobierno de Piñera es otro ejemplo. Desde 1958, la centro derecha no llegaba al gobierno y las similitudes entre aquel y el actual no son pocas: Piñera al igual que Alessandri, llegan desde el mundo empresarial, forma un gobierno con perfil tecnocrático, con un gabinete de empresarios y técnicos, en su mayoría con independencia de partidos y por fuera de la política, y con fuerte vinculación al gobierno autoritario. Piñera ha formado un gobierno de fuerte acento empresarial y tecnocrático, alejado de los partidos, que definió como “*un equipo de excelencia*”.

Algunos de los nombres de colaboradores y asesores, se corresponden a integrantes de importantes empresas o con intereses en ellas y participan de la lógica que el propio presidente electo ha instalado: el vínculo estrecho entre negocios, formación y éxito profesional, inexpertos en política partidaria, que hace difícil separar lo público y lo privado.¹⁹ El predominio de independientes, en su mayoría católicos y con estudios en el extranjero, generó fuertes incomodidades hacia la interna de la coalición gobernante por pérdida de poder, pero también una profunda autocrítica hacia la interna de la oposición, con cuestionamiento hacia el rol de los tecnócratas, como recurso de gobernabilidad y contención de demandas.

¿Por qué todos los presidentes sucumbieron ante la tentación tecnocrática? Esta es una larga historia con antecedentes a lo largo del siglo y que se profundiza durante la era de Pinochet, cuando los técnicos pasan a convertirse en arquitectos de las políticas económicas y sociales posteriormente exitosas. El imaginario colectivo, asocia el éxito a los tecnócratas y al saber especializado que lideró la política económica e ideológica neoliberal que predominó en la década de los ochenta.

Pero no sólo fueron implantadores de políticas y programas durante la dictadura; también, siguieron siendo “*bien vistos*”, por haber proporcionado herramientas, -vía organismos nacionales o

¹⁸ Recurre al selecto grupo de tecnócratas reunidos en el think tank “Expansiva”

¹⁹ Piñera dueño de fondos de inversión, líneas aéreas, y el canal privado Chilevision, con una fortuna que ronda los 2 mil millones de dólares; Canciller Alfredo Moreno de directorios de D&S y Falabella; Joaquín Lavín en Educación, propietario de Universidad del Desarrollo; Felipe Larraín, Hacienda, con intereses en Antar Chile, eléctrica Guacolda y celulosa Arauco; Jaime Mañalich, Salud, dueño de Clínica las Condes; María Benítez, Medio Ambiente, dueña de consultora para compañías mineras; Laurence Golborne, proviene de la gerencia de la cadena retail Cencosud (LeMonde 2010:numero129)

internacionales-, que facilitaron acuerdos y acercamientos, para el tránsito a la democracia y su fortalecimiento, de la mano del éxito económico. Para una parte importante de la sociedad, los éxitos se construyeron por fuera de lo político y lo partidario. El éxito heredado se construyó con sustento tecnocrático, por fuera de lo político partidario, pero en forma inequitativa, segmentado y con exclusión. En este escenario, las demandas emergentes no son canalizadas debidamente porque los partidos son incapaces de representar adecuadamente, dado el sistema electoral vigente que cristaliza un empate eterno entre dos bloques de similar tamaño. Los partidos no tienen suficientes estímulos para ir al encuentro de la sociedad porque la posibilidad de “doblar” en un distrito es mínima. Por tanto, el problema se torna casi estructural. Una sociedad no representada debidamente; partidos políticos que pierden enraizamiento en la sociedad y que aceptan el status quo del empate; áreas exclusivas de gestión de gobierno para la tecnocracia; y una sociedad que sigue viendo con buenos ojos a los constructores científicos del éxito. O sea, una combinación problemática para la democracia.

4.3. Herencia económica-educativa

La transición a la democracia en un entorno de éxito económico, -que sitúa a Chile en el lugar 45 de 160 países en lo referido a desarrollo humano, (PNUD, 2010)-, constituyó paradójicamente una limitación a esta transición, ya que permitió a la derecha y militares, negociar con ventajas comparativas, -respecto a otras dictaduras de la región- manteniendo enclaves autoritarios, y dando lugar a un sistema presidencialista *semi-soberano* (Huneus, 2012). La Junta Militar, que gobernó Chile a partir de 1973, creó un duro Estado policial, con detenciones, ejecuciones y purgas en la administración pública, que sumado al fuerte terrorismo de Estado, llevó a un importante número de chilenos a al exilio. En el entorno autoritario se introducen reformas económicas neoliberales, con privatizaciones, desregulaciones y liberalizaciones, pautando nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad.

El conjunto de reformas que a finales de los setenta comenzó a instrumentarse en Chile, y que conocimos como el *modelo chileno*, tiene su sustento en *tecnócratas* de la escuela de Chicago. Fue el comienzo de la institucionalización de la dictadura, introduciendo cambios que van desde lo económico, a lo social, laboral, educacional, con un fuerte componente ideológico-filosófico que marca el presente y a toda una generación de políticos de derecha. En el Chile actual, a algunos todavía les cuesta hablar de dictadura y si de pronunciamiento, cuando se refieren a la dictadura de Pinochet. (Rosenblatt 2013)

El *milagro económico chileno*, determina límites y frenos a la reconstrucción democrática poniendo un signo de interrogación sobre los trabajos de la academia, en particular Lipset, (1977), quien destacaba los vínculos positivos entre el crecimiento de la economía y el desarrollo de la democracia. La mejora económica trajo una mayor exigencia respecto a las prestaciones públicas y genera nuevas expectativas que no siempre van acompañadas con los tiempos políticos. Como afirmara O'Donnell (2009), un bajo desarrollo de los procesos democráticos puede estar vinculado a un bajo o alto desarrollo económico; mientras que la democracia es viable o encuentra un fuerte desarrollo, en los niveles medios del desarrollo económico. En sentido opuesto, Altman (2001) expresa casi lo mismo: el éxito económico, puede llevar a un crecimiento de las expectativas, a las cuales el Estado no puede dar respuesta, generando inestabilidades políticas y sociales, independiente de si el sistema político es democrático o no.

El sistema educativo, junto con el económico, es la dimensión que menos se ha modificado desde la década de los ochenta (Garretón, 2010), manteniendo sus características en todos los gobiernos posteriores a la dictadura. El sistema neoliberal instrumentado en la dictadura, considera a la educación como una mercancía, manejada por leyes de mercado, donde los privados obtienen ganancias y donde el Estado se desliga de responsabilidades como regulador y garante. La visión tecnocrática de la educación, -fundamentada y desarrollada en dictadura- con el tiempo logra imponerse, aun en sectores que en principio no la apoyaban.

La progresiva privatización y mercantilización de la enseñanza, generó problemas en todos los estamentos educativos, pero en particular en el universitario, consecuencia de los bajos aportes del Estado hacia las universidades públicas, los altos niveles de endeudamiento de estudiantes y familias. Las privatizaciones, que en teoría buscan ofrecer mayor oferta en elección de bienes y servicios, en realidad trajo encarecimiento y como consecuencia de ello discriminación educativa y social. Existen además carencias de espacios democráticos y de coparticipación hacia el interior de las instituciones ya que la idea de democracia participativa parece entrar en conflicto con la de *gobierno de los técnicos*, ya que los tecnócratas prefieren el menor nivel de intervención, que esté por fuera de su conocimiento experto.

En la educación, -eje argumental de las movilizaciones- la tecnocracia es generadora, articuladora y recaudadora del sistema. Movilizaciones, que en realidad esconde carencias que van más allá de lo tecnocrático e involucra a lo institucional, político e histórico. Los jóvenes cuestionan la educación y su tecnocracia asociada heredada, e ignoran un sistema político que también lo sienten heredado, incapaz, inoperante y viciado de ilegitimidad.

El sistema educativo debería flexibilizarse para dar respuesta a una parte significativa de la sociedad: desde la recuperación de la democracia, se han registrado avances significativos en la cobertura, -niveles de deserción relativamente bajos para América Latina; siete de cada diez estudiantes universitarios son primera generación en su núcleo familiar (Garretón, 2010),- pero el sistema, construido en base a un mercado desregulado, ha generado endeudamiento para costear estudios.

La nueva generación de estudiantes parece rechazar el sistema educativo heredado, del que no fueron ni son partícipes en su construcción. Se oponen a una educación basada en el lucro, que discrimina, segmenta, excluye y ha llevado al endeudamiento de las familias. El modelo económico que se heredó, condiciona el modelo educativo, cuando quizás lo razonable sería plantear una educación, que fuera consecuencia y beneficio del éxito económico, es decir, que deje de ser *un bien de consumo y se transforme en un derecho social*.

Las reformas necesarias, pasan por lo político, por lo que se hace necesario cambios profundos, que van más allá de lo técnico-administrativo. En Chile los servicios educativos son cada vez más una mercancía privada, -manejada por privados, organizada por técnicos- que sólo puede adquirirse mediante la disposición de poder adquisitivo, que lleva a que los menos favorecidos económicamente o de escasa educación formal, queden definitivamente excluidos de la posibilidad de mejorar su nivel de vida. La base administrativa tecnocrática, construida por más de veinte años en la educación, no fue preparada ni cuentan con las herramientas políticas para hacer frente a los cambios, y es incapaz de entender y canalizar, en este caso, a una parte importante de la sociedad.

En este marco, los estudiantes se movilizan. Ponen el tema en el centro de la agenda pública mediante la protesta callejera. Los partidos políticos son sorprendidos y no son capaces de absorber y canalizar las demandas. La distancia es tan grande que los líderes estudiantiles terminan por desconfiar de los acercamientos y de la saga de respuestas. Los caminos ensayados durante los últimos quince años para resolver el problema nunca pasaron de ser meras recetas técnicas orientadas a realizar retoques o cambios marginales. Desde los distintos gobiernos nunca se abrió una discusión seria sobre los pilares del sistema educativo heredado. Tampoco los partidos tomaron el reto con seriedad pues los propios dirigentes creyeron que el problema se solucionaría con respuestas técnicas y no políticas.

5. CONCLUSIONES

Más allá de los antecedentes históricos que marcan la presencia del conocimiento experto en los gobiernos anteriores a 1973, es a partir del régimen autoritario de Pinochet donde su participación se hace más relevante y determinante. Los gobiernos democráticos posteriores encuentran una tecnocracia influyente y exitosa, en un entorno de herencias institucionales

-pautadas en la transición-, que llevan a su consolidación, pero que produce importantes déficit políticos y un creciente malestar hacia la política y su entorno.

Este malestar puede explicarse, de forma resumida, como la vinculación de diversos aspectos: una democracia histórica y consolidada en un entorno de fuerte economía de mercado, un sistema electoral excluyente y deficitario, partidos políticos históricos e importantes –con fortaleza tal vez, sobredimensionados por la academia-, pero deficitarios y poco receptivos. Como consecuencia de ello, se desarrolla una centralidad tecnocrática, que además de ser histórica, y en gran medida apolítica, pasa a ser determinante y excluyente.

La fortaleza histórica de los partidos políticos chilenos está en duda y abre interrogantes para el futuro. El sistema electoral heredado vigente, desplaza indirectamente el poder con base política, a favor de la administración tecnocrática, y genera además, partidos políticos de dudosa fuerza institucional y representativa. Para mitigar y/o legitimar esta tecnocracia, se hace necesaria la existencia de partidos políticos fuertes, y para ello, se debe modificar o eliminar el sistema binominal de elección por otro más representativo de la sociedad.

Estas modificaciones son prioritarias para poder generar una socialización política consistente, que permita diferenciar entre intereses particulares e intereses generales, entre problemas estructurales y causas coyunturales. Los jóvenes y una parte importante de la sociedad, con las movilizaciones, ganaron legitimidad, pero no así el poder representativo; la institucionalidad política vigente, no da respuestas a las demandas y por su parte, busca soluciones por fuera del sistema político.

La democracia surgida en Chile, luego de los años de autoritarismo, es diferente a la de los periodos democráticos anteriores: la transición fue programada y pautada *desde arriba*, con un régimen autoritario que negoció e institucionalizó las condiciones, con altos contenidos antidemocráticos y con modelos de gestión muy precisos, sobre todo en la educación y la economía. Con imperfecciones, limitaciones y restricciones, se reconstruyó un sistema democrático, -que podía ser útil y acordado para la salida del autoritarismo-, pero el cual hoy se hace necesario modificar debido a que no da respuestas políticas a las demandas por parte de la sociedad, produciendo creciente malestar y desinterés hacia y con la política.

Una parte importante de los ciudadanos percibe que ha perdido el control sobre lo que sucede en los gobiernos; dicho control descansa sobre el conocimiento experto o tecnocrático, fuertemente potenciado por importantes déficits políticos e institucionales. La tecnocracia, *colonizó*

los diferentes gobiernos de forma no siempre legitimada; su *discurso y herramientas*, se apropió tanto de la derecha como de la izquierda.

El trabajo aporta evidencia sobre los defectos institucionales, herencias y debilidades de los partidos y el sistema electoral, los cuales generaron una creciente influencia del conocimiento experto sobre la política. Para contrarrestar esta creciente influencia, es necesario realizar cambios institucionales importantes que fortalezcan la dimensión política por sobre la técnica. Este fortalecimiento implica el pasaje a instituciones políticas modernas y participativas, las cuales logren generar contrapesos de forma de limitar un presidencialismo exacerbado. A partir de ello, otorgarle al Congreso un rol que sea percibido por la ciudadanía como real e importante; de esta forma, renovar-construir partidos políticos que constituyan cauces de opinión y jerarquicen problemas, modificando un sistema electoral, para que sea participe de la diversidad política, cultural, étnica y social, al tiempo que no se afecte la gobernabilidad. Actualmente la democracia chilena requiere, fundamentalmente, representatividad y participación, como forma de legitimación para el ejercicio de la gestión pública, junto con capacidad técnica.

En una población acostumbrada a ser gobernada por gobiernos más o menos eficientes, la desmovilización política ayuda a construir la legitimidad de los tecnócratas. Los cambios necesarios, -fundamentalmente electorales-, son de por sí complicados, ya que requieren mayorías especiales en el Congreso. Con el sistema binominal vigente heredado, se torna difícil lograr las mayorías necesarias debido a la sobrerrepresentación parlamentaria que logran las minorías.

Para llevar adelante las reformas en la institucionalidad heredada, se debe tener en cuenta que: a) Una parte importante de la sociedad entiende que el éxito económico de Chile se logró con recursos extra partidarios, sin política ni políticos, con recursos tecnocráticos, justificando así la anti-política. Estos tecnócratas, en gran parte, no eran políticos, no respondían a ellos, ni tenían formación política. b) Las nuevas generaciones son jóvenes formados en un sistema educativo inserto en un país exitoso económicamente, pero con una redistribución de la riqueza regresiva. Estas nuevas generaciones no conocieron el autoritarismo más allá del relato histórico u oral. Es una generación nacida en democracia -*parcialmente tutelada*- pero sin los traumas del pasado y con un contexto diferente: para ellos “*el futuro es ahora*” y la construcción política en “*los nuevos tiempos*” pasa por sus expectativas, sus herramientas y las que les brindan lo que los rodea, esto es, una sociedad marcada por el triunfalismo, éxito personal, profesionalismo y competencia, donde la política y sus figuras están por fuera de sus expectativas inmediatas. c) El desencanto con los procesos políticos tradicionales, la apatía y los déficit de representación política, hacen que una parte de la sociedad, se comprometa a la participación mediante el uso de las nuevas tecnologías de

la información, creando así una nueva *esfera pública*, donde los ciudadanos deliberan y debaten: la negación de la política, está construyendo otra forma de hacer política sin intermediarios.

El problema no se centra en si es necesaria más o menos tecnocracia para lograr la gobernabilidad. El déficit se encuentra en las políticas y en la posibilidad de alcanzar reformas de consenso en un entorno de estabilidad política, progreso económico, bienestar social y equidad. Se deben buscar acuerdos básicos en torno a tecnocracia y política: la democracia chilena requiere de partidos políticos fuertes, modernos y organizados, pero también de una administración seria y profesional, que ayude a potenciar la confianza ciudadana en ellos. La tecnocracia y los gobiernos que se apoyan en ella se legitiman en la medida que se generalizan las demandas y el sistema político no brinda soluciones políticas adecuadas.

Los nuevos tiempos parecen exigir otro vínculo con la ciudadanía, un nuevo vínculo que no pasa por debilitar o anular esta tecnocracia, pero sí por fortalecer el sistema político-partidario. Esta democracia moderna requiere fundamentalmente representatividad, participación y capacidad técnica, como forma de legitimación para el ejercicio de la gestión pública. Se necesitan políticos que acumulen en su persona la doble legitimación, esto es, la representativa, basada en la comparecencia electoral, y la funcional, basada en el saber especializado.

En el Chile actual, -con su porcentaje importante de abstención-, la legitimidad que se consigue con el voto ya no es suficiente. Las reformas deben ser políticas, por lo que se hacen necesarios cambios profundos, más allá de lo técnico-administrativo. Si no se producen estos cambios en la institucionalidad heredada, la influencia tecnocrática probablemente se consolide y sea aun más determinante.

El futuro puede determinar neologismos como *polícratas y tecnolíticos*,²⁰ es decir políticos con conocimientos en gestión, que garanticen una buena distribución de los recursos, los cuales son siempre escasos, y tecnócratas con base política, los cuales no olviden que detrás de los indicadores existen realidades sociales y culturales diferentes. El desafío no es terminar con la tecnocracia, pues en la actualidad ésta es cada vez más necesaria debido a la especificidad creciente de los temas; el desafío es generar un sistema político que subordine lo técnico a lo político. Se vuelve necesaria una política de calidad y responsabilidad, que brinde respuestas al presente y construya el futuro.

²⁰ Joaquín Fernández, asesor del Ministerio de Defensa de España

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Altman David (2001) “Democracia política y desarrollo económico: ¿Existe alguna relación? en *Desarrollo Humano e Institucional en America Latina*, en Sistema de Portales Profesional; disponible en <http://www.gobernabilidad.cl/>

Altman, David y Castiglione Rossana (2009) “Gabinetes ministeriales y reformas estructurales en America Latina, 1985-2000” en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, enero-diciembre, 18-01, pp. 15-40.

- Amiel, Anne (2000) Hannah Arendt. *Política y acontecimiento*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión SAIC.
- Appadurai, Arjun (2007) *El rechazo de las minorías*. Barcelona: Tusquets Editores S.A.
- Arendt, Hannah (1995) *De la historia a la acción*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Arendt, Hannah (2005) *La condición humana*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Arostegui, Julio y Saborino, Jorge (2005) *El tiempo presente*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- Avendaño, Mireya (2010) “Tecnocracia y democracia en el Chile contemporáneo: el caso de los gobiernos de la Concertación (1990-2010)” en *Revista de Sociología*, 24, pp. 199-217.
- Bentancur, Nicolás (2007) “¿Hacia un nuevo paradigma en las políticas educativas? Las reformas de las Reformas en Argentina, Chile y Uruguay (2005-2007)” en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 16, pp. 159-180.
- Bobbio, Norberto (1989) *Estado, gobierno y sociedad*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Buquet, Daniel (2007) “Entre la legitimidad y la eficacia: reformas en los sistemas de elección presidencial de América Latina” en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 16, pp. 35-50.
- Canetti, Elías (2000) *Masa y poder*. Barcelona: Alianza Editores.
- Castells, Manuel (2006) *La era de la información. Economía, sociedad, y cultura*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Chasqueti, Daniel (2008) *Democracia, presidencialismo y partidos políticos en América Latina: Evaluando la “difícil combinación*. Montevideo: Ediciones Cauce.
- Chomsky, Noam y Dieterich, Heinz (1999) *La sociedad global*. Argentina: Editorial 21 s.r.l.
- Cox, Cristian (2012) “Políticas y política educacionales en Chile 1990-2010” en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, enero-junio 2012, 21-01, pp 13-42.
- Cuadra, Álvaro (2012) *Chile: la deserción de las masas*. Chile: Primera edición digital
- Dahl, Robert (1987) *Un prefacio a la teoría democrática*. México: Ediciones Gernika S.A.
- Diamond, Larry (2000) “El final de la tercera ola y el futuro global de la democracia” en *Democracia, discusiones y nuevas aproximaciones*. López y Mainwaring (ed.), pp. 13-101, Argentina: Universidad de Quilmes.
- Duverger, Maurice (1972) *Los partidos políticos*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Espinoza, Oscar (2012) *Fortalezas y debilidades del sistema educacional chileno: una mirada crítica* Santiago de Chile: Centro de investigación en educación.
- Fernández, María y Rivera, Eugenio (2013) “Instituciones informales, coaliciones y gabinetes en el presidencialismo chileno” en *Revista de Ciencia Política*, 52-1, pp. 155-184.
- García Raggio, Ana María et al. (2004) *La política en conflicto*. Buenos Aires: Prometeo libros.
- Garretón, Manuel (1990) *Los partidos políticos chilenos en la perspectiva de la transición y consolidación democráticas*. Working Paper # 138 Kellogg Institute.
- Garretón, Manuel y Garretón Roberto (2010) “La democracia incompleta en Chile: La realidad tras los rankings internacionales” en *Revista de Ciencia Política*, 30-1, pp. 115-148.
- Habermas, Jürgen (2008) *Más allá del Estado nacional*. Madrid: Editorial Trotta.
- Habermas, Jürgen (2010) *Ciencia y técnica como “ideología”*. Madrid: Editorial Tecno.
- Henríquez, Ledly (2006) “La reforma al sistema binominal en Chile. Propuestas para el debate” de Carlos Huneeus (compilador) en *Política*, 47, pp. 201-217 Universidad de Chile, Chile.

- Huneus, Carlos (2011) "Reforma electoral en Chile". En Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. www.juridicas.unam.mx
- Huneus, Carlos (2012) "El presidencialismo semi-soberano" en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, julio-diciembre, 21-02, pp. 31-54.
- Huneus, Carlos. (1998) "Las elecciones en Chile después del autoritarismo" en Dutrenit, Silvia (ed.) *Huellas de las Transiciones Políticas. Partidos y Elecciones en América Latina*. CERC, Santiago
- Lanzaro, Jorge (2001) (ed.) *Tipos de presidencialismos y coaliciones políticas en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Lanzaro, Jorge (2007) *Gobiernos de izquierda en América Latina*. Montevideo: FESUR.
- Latinobarómetro, Corporación. Disponible en <http://www.latinobarometro.org>
- Lipset, S. M. (1977) *El hombre político*. Buenos Aires. EUDEBA.
- Mainwaring, Scott (1999) "La durabilidad de la democracia en América Latina, 1990-1998" en *Política y Gobierno*, VI-2, pp. 315-363.
- Mainwaring, Scott y Scully Timothy "Introducción: Sistema de partidos en América Latina" en *La construcción de instituciones democráticas*, pp. 1-28, Cifra
- Mancebo, María Ester (2012) "Descentralización, financiamiento y gobernanza educativa en Chile y Uruguay" en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, enero-junio 2012, 21-01, pp. 93-118.
- Mayol, Alberto (2003) "La tecnocracia: falso profeta de la Modernidad" en *Revista de Sociología*, 17, pp. 95-123, Facultad de Ciencias Sociales, Chile. México: Instituto Mora.
- Moreira, Constanza (2006) "Sistemas de partidos, alternancia política e ideología en el cono sur" en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 15, pp. 31-56.
- Mouffe, Chantal (2007) *En torno a lo político*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- O'Donnell, Guillermo (2009) "El Estado burocrático autoritario" Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Orjuela, Luis (2007) "Ideologías, tecnocracia y sociedad: implicaciones para América Latina" en Hoyos Vásquez, Guillermo, *Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía*. CLACSO Buenos Aires. Disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/hoyos>
- Payne, Mark et al (2003) *La política importa. Democracia y desarrollo en América Latina*. Washington: BID.
- Pérez-Díaz, Víctor (2008) *El malestar de la democracia*. Barcelona: Crítica.
- Podestá, Bruno (2008) *Las dos caras de Jano. La cultura y los países en la era de la globalización*. Montevideo: CLAEH.
- Ramírez, Jorge y Varas, Pablo (2013) "Aprobación presidencial en Chile 2000-2012: Sus determinantes y su efecto en la toma de decisiones" en *Política/ Revista de Ciencia Política*, 15, pp. 85-117.
- Ramis, Álvaro (2010) "Ciudadanos contra gerentes" en *Le Monde Diplomatique*, marzo, 129.
- Rawls, John (1990) *Sobre las libertades*. Barcelona: Ediciones Paidós. *Revista de Ciencia Política*, 32-1, pp. 65-85.
- Rosenblatt, Fernando (2013) *Chile: a 40 años del golpe de Estado*. Análisis-entrevista en Espectador.com. 12/09/2013.
- Rubano, Mariela (2007) "La reforma del sistema electoral chileno" en *Estudios Constitucionales*, Año 5, 2, pp. 365-380. Universidad de Talca, Chile.

- Sartori, Giovanni (1979) *La política. Lógica y métodos en las ciencias sociales*. 4ta reimp. (2002). México: Fondo de Cultura Económica.
- Scully, Timothy. 1997. (1995). "La reconstrucción de la política de partidos en Chile", en Mainwaring, Scott y Timothy Scully (comp.). *La Construcción de Instituciones Democráticas*. CIEPLAN. Santiago de Chile.
- Segovia, Carolina y Laroze, Denise (2008) "*Demandas por reformas al régimen electoral chileno: la visión desde la opinión pública*" trabajo presentado en Seminario Reformas a Sistemas Electorales, Santiago, Chile.
- Segovia, Carolina y Gamboa, Ricardo (2012) "Chile: el año en que salimos a la calle" en *Sociedad*, 152, noviembre-diciembre, pp. 68-77
- Siavelis, Peter (2004) "Sistema electoral, desintegración de coaliciones y democracia en Chile: ¿El fin de la Concertación?" en *Revista de Ciencia Política*, XXIV-1, pp. 58-80.
- Siavelis, Peter M. (2000) "La relación Ejecutivo - Legislativo en el Chile Post Pinochet". En Lanzaro Jorge (ed.) *Tipos de Presidencialismo y Coaliciones en América Latina*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Silva, Patricio (1997) "Ascenso tecnocrático y democracia en América Latina" en *Nueva Idea*.
- Silva, Patricio (2010) *Tecnocracia y gobernabilidad democrática en América Latina*. San José, C.R.: FLACSO.
- Silva, Patricio. (2006) "Los tecnócratas y la política en Chile" en *Revista de Ciencia Política*, XXVI, pp. 175-190
- Soberg, Matthew y Mainwaring, Scott (2002) "Presidencialismo y democracia en América Latina: revisión de los términos del debate" en *Presidencialismos y democracia en América Latina*, cap. 1, Paidós.
- Somma, Nicolás (2013) *Movimientos sociales y malestar ciudadano en Chile*. Informe para el proyecto "A crisis of legitimacy: challenges to the political order in Argentina, Chile y Uruguay" Universidad Diego Portales.
- Trias, Eugenio (2005) *La política y su sombra*. Barcelona: Editorial Anagrama.
- Vaillant, Denisse (2012) "La gobernanza educativa y los incentivos docentes: los casos de Chile y Uruguay" en *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, enero-junio, 21-01, pp. 119-140.
- Valenzuela, Arturo. 1998 (1994). "La Política de Partidos y la Crisis del Presidencialismo en Chile: una propuesta para una reforma parlamentaria de gobierno" en Linz, Juan y Arturo Valenzuela (eds.), *La Crisis del Presidencialismo* Tomo 2. Madrid. Alianza Editorial.
- Velasco, Juan Carlos (2003) *Para leer a Habermas*. Madrid: Alianza Editorial.
- Zarzalejos, José Antonio et al. (2012) *¿Tecnocracia o democracia?: gestión y representatividad*. Madrid: Llorente y Cuenca.